

Please kindly note that the submission by the Republic of Argentina entails in the following order:

- 1) The submission by the Programa Verdad y Justicia of the Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
- 2) The submission by the Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal;
- 3) The submission by the Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación;
- 4) The submission by the Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario of the Ministerio de Defensa;
- 5) The submission by the Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación;
- 6) The submission by the Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos of the Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Representación de la
República Argentina
Organismos Internacionales en Ginebra

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

CMH/jgz
IV/100-8
No. 71/19

La Misión Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra presenta sus atentos saludos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, con relación a la Nota Ref. G/SO 217/1, de fecha 30 de noviembre de 2018, tiene a bien remitir aportes de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, como contribución al informe que presentará el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre políticas públicas y estándares para una efectiva investigación de las desapariciones forzadas en el 45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en septiembre 2019.

La Misión Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra reitera a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las seguridades de su distinguida consideración.

Ginebra, 4 de marzo de 2019



OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS

- Secretaría del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias -

Ginebra



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Memorándum

Número:

Referencia: Respuesta al ME-2018-64704862-APN-SSPYEIDH#MJ (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias -ONU).

Producido por la Repartición: DNPVYJ#MJ

A: José Brian Schapira (SSPYEIDH#MJ),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Director Nacional del Programa Verdad y Justicia, con motivo del memorándum de la referencia, mediante el cual se solicita a esta Dirección colaboración para dar respuesta al requerimiento formulado por la Dirección de Derechos Humanos y Temas de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, originado, a su vez, en un requerimiento de información del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas.

Al respecto, en primer lugar, estimo pertinente recordar que la competencia de esta Dirección Nacional está relacionada con el impulso y fortalecimiento institucional del proceso de verdad y justicia vinculado a los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado (1974-1983), de conformidad con lo reglado por el Decreto PEN 606/2007, sus modificatorios y la Decisión Administrativa 312/2018. Por consiguiente, y por imperio del principio de legalidad penal (cfr. arts. 18 y 75 –inc. 22- de la Constitución Nacional), los hechos que constituyen el objeto de las acciones asignadas a esta dependencia no son juzgados en función del tipo penal de desaparición forzada de personas, actualmente previsto en el Código Penal de la Nación (art. 142 ter, cfr. Ley 26.679, Boletín Oficial: 09/05/2011), sino sobre la base de la ley vigente al momento de comisión del hecho, la cual que no incluía dicha figura como delito autónomo.

Aclarado cuanto precede, a continuación, primero, se formulan consideraciones sobre el marco jurídico

general por el que se prohíben las desapariciones forzadas y, luego, se brinda información relativa a los puntos pertinentes del cuestionario elaborado por Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU -adjuntado oportunamente al memo que origina el presente- (puntos 1, 5, 6, 7, 8, 12, 14 y 15).

En ese orden de ideas, corresponde señalar que la prohibición de la desaparición forzada se encuentra receptada en nuestro derecho interno tanto en la Constitución Nacional como en el Código Penal de la Nación.

En efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, la *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas* aprobada por ley 24.556, posee jerarquía constitucional. En su artículo primero dicho instrumento establece que los Estados Partes se comprometen a *no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales*.

A su vez, el artículo 142 ter del Código Penal de la Nación establece que *se impondrá prisión de diez a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro d un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona*.^[1]

Por otra parte, cabe destacar que en el mes de noviembre de 2007 se sancionó la ley 26.298 que aprueba la *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*.

A nivel internacional, la República Argentina ha suscripto diversos instrumentos internacionales que consagran la protección de las personas contra la práctica de la desaparición forzada: la *Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*; la *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas*; la *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*; el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*; *Estatuto de la Corte Penal Internacional*; la *Convención Americana sobre Derechos Humanos*; y la *Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad*.

Resulta importante recordar que la reforma constitucional de 1994, en el párrafo 22 de su artículo 75, otorgó a los tratados rango superior a las leyes y jerarquía constitucional a 11 instrumentos de derechos humanos. En este sentido, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada no posee aún rango constitucional, sin embargo la Convención Interamericana sí.

Con anterioridad a la reforma constitucional los tribunales internos de nuestro país habían comenzado a aplicar directamente los tratados internacionales de derechos humanos en causas civiles o penales.

Los instrumentos jurídicos internacionales con jerarquía constitucional y los demás instrumentos ratificados por Argentina, son parte del derecho vigente, pueden ser invocados ante los tribunales, la administración y las instituciones independientes de derechos humanos, por las personas, grupos y comunidades para la promoción y la defensa de sus derechos y deben ser aplicados directamente por los tribunales internos y los órganos del Estado.

Por otro lado, desde la ratificación de dichos instrumentos internacionales por el Poder Ejecutivo, procede el recurso de individuos, grupos y comunidades ante un órgano internacional jurisdiccional o cuasi jurisdiccional ante la violación de los derechos reconocidos en ellos.

El delito de desaparición forzada de personas fue introducido en el ordenamiento jurídico argentino en el año 2007 mediante la sanción de la ley n° 26.200[2]. Dicha ley adopta el Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI) y se refiere a la desaparición forzada como conducta individual del crimen de lesa

humanidad.

El artículo 2º, apartado 2º, de dicha ley remite a la definición del ECPI: *“Las conductas descriptas en los artículos 6º, 7º, 8º y 70 del Estatuto de Roma y todos aquellos delitos y crímenes que en lo sucesivo sean de competencia de la Corte Penal Internacional, serán punibles para la República Argentina en la forma que esta ley prevé”*.

A su vez, el artículo 7º apartados 1, i) y 2, i) del ECPI tipifica el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas en los siguientes términos: *“1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: [...] i) Desaparición forzada de personas [...]*

“2. A los efectos del párrafo 1: [...] i) por «desaparición forzada de personas» se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado [...]”.

Las penas aplicables al crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas están tipificadas en el artículo 9º de la ley nº 26.200 al establecer que *“En los casos previstos en el artículo 7º del Estatuto de Roma [...] la pena aplicable es de 3 a 25 años de prisión. Si ocurre la muerte, la pena será de prisión perpetua”*. Asimismo, la ley nº 26.200 establece que la pena no podrá ser en ningún caso inferior a la que pudiera corresponderle al autor si fuera condenado por las normas del Código Penal de la Nación (art. 12), y dispone la imprescriptibilidad de estas conductas (art. 11).

A su vez, dicha ley establece que “[n]inguno de los delitos previstos en el Estatuto de Roma ni en la presente ley puede ser aplicado en violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En tal caso, el juzgamiento de esos hechos debe efectuarse de acuerdo con las normas previstas en nuestro derecho vigente”. De este modo, si se llega a verificar un déficit en cuanto al principio de legalidad, el juez nacional está obligado a juzgar el caso según las reglas comunes del Código Penal.

De acuerdo a lo expuesto surge que con anterioridad a la sanción de la ley nº 26.200 no existía una norma penal en el ordenamiento jurídico argentino que reprimiera el delito de desaparición forzada de personas. Sin embargo, cabe reiterar aquí que el Estado Argentino ya había ratificado e incorporado al derecho interno las dos convenciones internacionales sobre la materia (la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas^[3]) y que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sentada en el caso Ekmekdjian (1992),^[4] las disposiciones de los tratados internacionales que sean lo suficientemente precisas son directamente aplicables.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que el 13 de abril de 2011 se sancionó la ley nº 26.679 que modificó tanto el Código Penal de la Nación (CPN) como el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) e incorporó al derecho positivo argentino disposiciones referidas al delito de desaparición forzada de personas.

En particular, debe señalarse que a partir de dicha reforma legislativa la desaparición forzada de personas se encuentra tipificada en el Código Penal de la Nación, en el Capítulo I del Título V, titulado *“Delitos contra la Libertad”*.

En efecto, el artículo 1º de la ley nº 26.679, incorpora el artículo 142 ter al Código Penal de la Nación, el que ha quedado redactado de la siguiente forma:

“Se impondrá prisión de diez a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona [...].”

Tal como se desprende del texto citado, puede notarse que el derecho interno argentino cuenta con una definición de *desaparición forzada* que está en plena conformidad con la definición brindada por el artículo 2 de la Convención.

El tipo penal describe la acción como la de privar la libertad de una o más personas, sin importar el modo, y siendo la acción desarrollada por agentes del Estado, personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Seguida a la privación de la libertad debe ocurrir la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. El delito se configura con una acción seguida de una omisión.

Actualmente, la *desaparición forzada* constituye un delito independiente dentro del ordenamiento jurídico argentino que se distingue de otros delitos relacionados con la desaparición forzada pero que poseen distinta naturaleza, como el secuestro, la detención arbitraria, la privación de libertad, la tortura y la privación de la vida o delitos similares que también se encuentran tipificados en el Código Penal.^[5]

El bien jurídico protegido es un bien de ofensa múltiple (protege varios bienes jurídicos), sin embargo, la protección de la libertad en su faz locomotiva, es lo que se tutela de manera preponderante.

Como fuera señalado, el artículo 142 ter del CPN prohíbe las conductas definidas en el artículo 2 de la Convención realizadas por *personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado*. Dichas conductas son investigadas y sancionadas por los operadores judiciales (ministerio público fiscal y magistrados).

Al respecto, cabe agregar que de acuerdo al Artículo 215 bis del CPPN “*El juez no podrá disponer el archivo de las causas en que se investigue el delito previsto en el artículo 142 ter del Código Penal, hasta tanto la persona no sea hallada o restituida su identidad. Igual impedimento rige para el Ministerio Público Fiscal*”.

Por otra parte, cabe destacar que de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional “[c]uando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de **desaparición forzada de personas**, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, **aun durante la vigencia del estado de sitio**” (el destacado me pertenece). Es decir que el derecho a no ser sometido a una la desaparición forzada continúa vigente aún en cualquier situación de emergencia pública o inestabilidad política. Como puede notarse, existen mecanismos específicos, de raigambre constitucional, para la protección en casos de desaparición forzada que no están sujetos a excepción alguna.

En relación a este punto, cabe recordar también que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –aprobada por ley 24.556 y de jerarquía constitucional- establece en su artículo primero que la prohibición de la desaparición forzada de personas tiene vigencia *aun en estado de sitio, emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales*.

En otro orden de ideas y en lo que hace al **régimen de responsabilidad penal** establecido en el derecho interno en relación con la desaparición forzada, se informa que conforme lo establecido en el Código Penal de la Nación, la obediencia debida es un eximente de la punibilidad legislado en el artículo 34, inc. 5°, que exime de responsabilidad penal al subordinado que recibe una orden de un superior.

Ahora bien, la jurisprudencia y la doctrina, consolidada en los procesos donde se investigan los hechos acaecidos en la última dictadura militar, han establecido que el conocimiento de lo disvalioso de la acción por parte de alguno de los partícipes, autores, coautores, de un delito, impide ampararse en el instituto de la obediencia debida.

Las órdenes de contenido ilícito manifiesto no poseen carácter vinculante para el subordinado: por lo que el responsable deberá responder penalmente por los injustos que cometió en ocasión de llevar a cabo la acción ilícita.

En el caso “Simón”, se ha dicho que *“la orden de un superior no es suficiente para cubrir a la agente subordinada que haya ejecutado esa orden y ponerlo al abrigo de toda responsabilidad penal si el acto es contrario a la ley y constituye en sí mismo un crimen, pues el no debe obediencia a sus superiores sino en la esfera de las facultades que estos tienen.”*^[6]

En cuanto a la responsabilidad del superior respecto del delito de desaparición forzada, cabe tener presente que la legislación nacional considera un delito cualquier tipo de participación por parte de un superior, ya sea por acción o por omisión. Así las cosas si este tiene conocimiento de un delito que estén cometiendo sus subordinados y no actuara en consecuencia, su conducta sería punible una vez sometida a proceso judicial, pudiendo encuadrar en varias acciones descriptas en el CPN.

La conducta podría ser encuadrada en los tipos penales descriptos en el artículo 142ter, analizando el grado de responsabilidad que le corresponde de acuerdo a su participación como autor, coautor, partícipe necesario, partícipe secundario.

Dicha conducta podría encuadrarse también en la de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tipificada en el artículo 248 y ss. del CPN, ya que rige la obligación de denunciar un hecho delictivo a los funcionarios públicos.

Por otra parte y en lo que respecta a la responsabilidad de los subordinados, cabe señalar que en todas las circunstancias ante una orden que implique la comisión de un delito, el subordinado debe oponerse al mismo. De lo contrario y tal como fuera señalado anteriormente, conforme la normativa legal vigente este sería considerado responsable del delito, con el grado de participación que corresponda.

En definitiva, el concepto de obediencia debida no es considerado aplicable en el derecho Argentino como defensa excusatoria de ningún tipo de delito que sea de contenido ilícito manifiesto.

Por otra parte, el Código Penal de la Nación Argentina, establece en su art. 142, *ter.*, la escala penal aplicable al delito de desaparición forzada, entre diez (10) y veinticinco (25) años de prisión, e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada.

En cuanto a los agravantes, el mismo artículo establece prisión perpetua para los siguientes casos: a) que la víctima fuera una mujer embarazada, b) una persona menor de 18 años, c) una persona mayor de 70, d) una persona con discapacidad, o e) una persona nacida durante la desaparición forzada de la madre.

En cuanto a los atenuantes, se prevé la disminución de la escala penal, un tercio del máximo y la mitad del mínimo, si cualquier responsable del delito libere a la víctima o proporcione información de su paradero.

La pena máxima que se aplica en el Código Penal de la Nación Argentina, es la pena a prisión perpetua.

Por otra parte y en cuanto al régimen de prescripción aplicable, cabe señalar que conforme la normativa establecida en el CPN, en su artículo 63, la prescripción de toda acción comienza a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, o si este fuese continuó, en que cesó de cometerse.

En el caso de la desaparición forzada, al ser un delito permanente, este cesaría cuando se conociera el paradero de la víctima.

En tal sentido, el artículo 215 bis del C.P.P.N. establece que el Juez no podrá disponer el archivo de las causas en que se investigue el delito de desaparición forzada hasta tanto la persona no sea hallada o restituida su identidad. Igual impedimento rige para el Ministerio Público Fiscal.

De existir una eventual posibilidad de plantear la prescripción, los plazos serían de 15 años para la prescripción de la acción penal (artículo 62 C.P.P.N), y de 20 años para la prescripción de la pena (artículo 65 C.P.P.N).

En cuanto a los delitos de lesa humanidad, en este tipo de delitos no opera el instituto de la prescripción, siendo ejemplo de esto los casos en los que se han investigado los delitos cometidos en la última dictadura militar.

A partir de la ratificación de los tratados internacionales en la materia, la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada de persona se ha convertido en norma interna.

En cuanto a las vías recursivas que pueden utilizarse respecto del instituto de la prescripción, cabe señalar que estas son las mismas que aquellas que se encuentran disponibles ante cualquier otra decisión judicial. Es decir que ante un supuesto pronunciamiento favorable a la aplicación del instituto de la prescripción, se podría apelar esa resolución conforme el artículo 449 del C.P.P.N.

En cuanto al marco jurídico que permite a los tribunales nacionales ejercer la jurisdicción universal respecto del delito de desaparición forzada, resulta oportuno mencionar que los principios de la justicia universal se encuentran presentes en nuestro orden jurídico desde 1853, ya que están consagrados en el artículo 118 de la Constitución Nacional. En efecto, el mencionado artículo prevé el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales nacionales sobre los delitos cometidos contra el derecho de gentes en el extranjero.

Por otro lado, la Ley N° 26.200 de implementación del Estatuto de Roma –instrumento que creó la Corte Penal Internacional- se aplica a los delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio del país, o en los lugares sometidos a su jurisdicción, a los delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo, a los delitos cometidos fuera del territorio argentino por nacionales argentinos o por personas domiciliadas en la Argentina, siempre que el imputado no haya sido absuelto o condenado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la pena, y en los casos previstos en convenios internacionales de los que Argentina es parte.

La justicia argentina dictó una de las primeras sentencias en el mundo en que se aplica el concepto de jurisdicción universal en el caso del pueblo armenio. Se trata de una resolución declarativa y fue dictada por el Juez Federal Norberto Oyarbide, quien dictaminó que el Estado turco cometió el delito de genocidio en perjuicio del Pueblo Armenio, entre 1915 y 1923.

La condena que no tiene efectos punitivos pero sí permitirá a los demandantes usar este antecedente con valor de sentencia ante otros foros internacionales.

La causa se inició a raíz de la demanda presentada en diciembre de 2000 por el escribano Hairabedián, descendiente de armenios asesinados, quien pidió que se investigue por la suerte de 50 familiares directos en la provincias armenias (vilayetos) de Palú y Zeitún, en poder del entonces Imperio Otomano. A esta querella se sumó luego la Colectividad Armenia de Buenos Aires por la matanza de población armenia en las provincias de Trebizonda, Erzerúm, Bitlis, Diarbekir, Jarput y Sivas, que de acuerdo con las estimaciones históricas costó la vida a un millón y medio de armenios en el primer genocidio del siglo XX.

Por otra parte y en relación a las medidas existentes para garantizar un trato justo al presunto delincuente en todas las fases del procedimiento, cabe señalar que los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional establecen ciertas garantías que rigen la aplicación de la justicia: el de debido proceso, el principio de

inocencia, juez natural, *non bis in idem*, derecho de defensa y derecho a la igualdad. Dichos principios protegen las garantías que poseen todos los imputados en cualquier tipo de proceso que se lleve a cabo en la República Argentina.

Estos principios también se encuentran consagrados en los artículos 1º (debido proceso, *non bis in idem*, juez natural) y 3º (principio de inocencia) del C.P.P.N.

Asimismo, el artículo 104 de dicho ordenamiento establece la obligatoriedad de la asistencia letrada de todo imputado en un proceso penal. Al respecto, debe tenerse presente que todo imputado tiene derecho a ser asistido por un defensor de su elección o proporcionado gratuitamente por el Estado.

Todos los principios y garantías mencionados anteriormente se encuentran vigentes al momento de investigar un hecho de desaparición forzada, sea que el presunto delincuente posea nacionalidad argentina o sea extranjero y sin importar donde haya sido cometido el delito.

Por otra parte, se informa que la autoridad competente para investigar y enjuiciar a los acusados de desaparición forzada es la justicia penal en lo criminal y correccional federal, conforme las competencias que otorgan las leyes aplicables.

Las autoridades militares no se encuentran facultadas para enjuiciar a personas acusadas de desaparición forzada, ni para investigar estos hechos.

Por su parte, las fuerzas de seguridad dentro del marco de la legislación argentina, sólo poseen poder de investigación como auxiliares de la justicia.

En relación al proceso y los mecanismos con los que las autoridades competentes esclarecen y demuestran los hechos relacionados con las desapariciones forzadas, se informa que todos los delitos que se cometen en el territorio nacional se rigen por los mecanismos que la ley establece para efectuar una denuncia (artículos 174 a 182; 183; 186; 196 y concordantes del C.P.P.N.).

La denuncia puede realizarse ante las autoridades judiciales, fiscalía o ante la autoridad policial. Al respecto, el artículo 180 del C.P.P.N. establece que el juez que reciba una denuncia, dará traslado al fiscal a los fines que éste requiera la investigación del hecho en caso de creerlo correcto. La investigación puede ser llevada adelante por el mismo juez o por la fiscalía en caso que el tribunal la delegue.

Si la denuncia es presentada ante un agente fiscal, este debe dar comunicación al juez, y practicar las medidas investigatorias ineludibles. (artículos 181 y 196 del C.P.P.N.). En caso de receptar la denuncia las fuerzas de seguridad, estas deberán comunicar el hecho al juez y fiscal de turno, y bajo la dirección de estos realizar las medidas de prueba en carácter de auxiliares (arts. 182 y 186 C.P.P.N.).

A su vez, cabe destacar que el artículo 183 del mismo ordenamiento exige a las fuerzas de seguridad investigar, por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por orden de autoridad competente, los delitos de acción pública a efectos de impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores y poder individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación.

Una vez efectuada la denuncia, se le asigna competencia a un Juzgado de Instrucción en lo federal y a un fiscal, los que inmediatamente comienzan a realizar la investigación respectiva.

Las personas que alegan que alguien ha sido víctima de una desaparición forzada pueden realizar la denuncia respectiva, tanto en el ámbito de la justicia como de las fuerzas de seguridad.

Los denunciantes tienen total acceso a autoridades judiciales independientes e imparciales, que van a llevar adelante la investigación conforme las reglas establecidas en los procesos.

Una autoridad judicial no tiene la posibilidad de negarse a investigar un caso. Si esto ocurriera nos

encontraríamos ante un hecho que puede ser planteado ante un tribunal superior, por alguna de las vías recursivas que la norma permite (3er párrafo del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación).

En cuanto a los *mecanismos existentes para proteger a los denunciantes, a sus representantes, a los testigos y a las demás personas que participan en la investigación, la instrucción y el juicio contra todo tipo de intimidación o maltrato* cabe mencionar existen diversos programas en el marco de las políticas públicas que ha llevado adelante el estado nacional, que tiene como objetivo la protección de testigos y víctimas, así como la asistencia a testigos y víctimas.

En el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, funciona el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados (cfr. Ley 25.764), el cual tiene como objetivo la protección tanto de víctimas como de testigos que estén siendo intimidados o amenazados.

A su vez, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación -a través del *Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”*- brinda asistencia tanto a las víctimas del terrorismo de Estado como a víctimas de graves violaciones actuales a los Derechos Humanos, imputables a agentes del Estado.

También los tribunales en el marco de un proceso tienen la facultad de ordenar diversos tipos de medidas protectorias en los casos en que lo estimen pertinente.

En otro orden de ideas, cabe mencionar que las autoridades que se encuentren desarrollando tareas de investigación en el marco de un proceso legal, no tiene restricciones para acceder a los lugares de detención en que haya motivos para creer que pueda encontrarse una persona desaparecida, siempre que su accionar se encuentre ordenado por la autoridad judicial a cargo del proceso.

A su vez y a los efectos de impedir que los sospechosos ocupen puestos que les permitan influir en investigaciones o amenazar a personas que intervengan en las investigaciones de casos de desapariciones forzadas, el artículo 194 bis del C.P.P.N establece que *el Juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha.*

Respecto al acceso a servicios y garantías jurídicos de las personas privadas de libertad, puede decirse que:

Los derechos de los imputados se encuentran específicamente reglamentados en el Código Procesal Penal de la Nación así como también en los respectivos Códigos Procesales de cada una de las Provincias que integran el territorio de la República Argentina.

Como fuera señalado anteriormente, estos derechos tienen raigambre constitucional, es decir que los derechos fundamentales de toda persona que es acusada de cometer un delito se hallan garantizados por nuestra Constitución Nacional (artículo 18). A partir de tales garantías constitucionales, los códigos de procedimiento reglamentan las mismas a fin de que puedan ser debidamente respetadas.

Vale destacar en este caso, el artículo 18 de la Constitución Nacional, el cual afirma que: *Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.*

Por otro lado, el artículo 43 establece que:

"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio."

En este mismo sentido, el Código Procesal Penal de la Nación, establece las siguientes disposiciones:

En primer lugar, se dispone que nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. (artículo 1). Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía (Art. 2) y en caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado (Art. 3°).

Derechos del imputado. Identificación

Los derechos que el Código de procedimiento acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso, cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso. Cuando estuviere detenido, el imputado o sus familiares podrán formular sus instancias por cualquier medio ante el funcionario encargado de la custodia, el que las comunicará inmediatamente al órgano judicial competente. (Art. 72 C.P.P.N)

Por otro lado, la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles (Art. 73 C.P.P.N)

En cuanto a la identificación del imputado, el Código Procesal Penal establece en su artículo 74 que *la identificación se practicará por las generales del imputado, sus impresiones digitales y señas particulares, por medio de la oficina técnica respectiva, y cuando no sea posible porque el imputado se niegue a dar sus generales o las dé falsamente, se procederá a su identificación por testigos, en la forma prescrita para los reconocimientos por los artículos 270 y siguientes, y por los otros medios que se juzguen oportunos.*

Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados y obtenidos no alterarán el curso de la causa, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de la misma o durante la ejecución (Art. 75 C.P.P.N).

Por otro lado, el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso (artículo 104 C.P.P.N). El imputado podrá designar defensor aún estando incomunicado y por cualquier medio. Asimismo, está contemplada la defensa permanente del imputado ya que en ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa y dejar a sus clientes sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor oficial (artículo 112 C.P.P.N)

Incomunicación

El juez podrá decretar la incomunicación del detenido por un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, prorrogable por otras veinticuatro (24) mediante auto fundado, cuando existan motivos para temer que se pondrá de acuerdo con terceros u obstaculizará de otro modo la investigación (artículo 205 C.P.P.N)

Cuando la autoridad policial haya ejercitado la facultad que le confiere el inciso 8 del artículo 184, el juez sólo podrá prolongar la incomunicación hasta completar un máximo de setenta y dos (72) horas. Se prevé que en ningún caso la incomunicación del detenido impedirá que éste se comuniquen con su defensor inmediatamente antes de comenzar su declaración o antes de cualquier acto que requiera su intervención personal.

Se permitirá al incomunicado el uso de libros u otros objetos que solicite, siempre que no puedan servir para eludir la incomunicación o atentar contra su vida o la ajena. Asimismo se le autorizará a realizar actos civiles impostergables, que no disminuyan su solvencia ni perjudiquen los fines de la instrucción.

En relación al tiempo permitido a un individuo de estar detenido sin que su detención sea revisada por un magistrado, el Código Procesal Penal de la Nación establece las siguientes normas:

Dentro de las atribuciones, deberes y limitaciones de los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad, se encuentra la de *Aprender a los presuntos culpables en los casos y formas que este Código autoriza y disponer su incomunicación cuando concurren los requisitos del artículo 205, por un término máximo de diez (10) horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial.* (artículo 184. Inciso 8° C.P.P.N))

Se dispone que los encargados de la prevención, comunicarán inmediatamente al juez competente y al fiscal la iniciación de actuaciones de prevención (artículo 186 C.P.P.N).

Restricción de la libertad. Detención. Prisión preventiva.

Respecto de las medidas que se refieren a la restricción de la libertad, el C.P.P.N establece que la libertad personal sólo podrá ser restringida, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (artículo 280 C.P.P.N). El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados y labrándose un acta que éstos firmarán, si fueren capaces, en la que se les comunicará la razón del procedimiento, el lugar donde serán conducidos y el juez que intervendrá.

En cuanto a la detención, el juez librará la orden para que el imputado sea llevado a su presencia, siempre que haya motivo para recibirle indagatoria (artículo 283 C.P.P.N). La orden debe ser escrita, y contendrá los datos personales del imputado u otros que sirvan para identificarlo y el hecho que se le atribuye, y será notificada en el momento de ejecutarse o inmediatamente después, con arreglo al artículo 142 del C.P.P.N. En caso de suma urgencia, el juez podrá impartir la orden verbal o telegráficamente, haciéndolo constar.

El Artículo 284 del C.P.P.N dispone casos en los que procede la detención sin orden judicial.

Por otro lado, según lo estipulado en el artículo 312 del C.P.P.N, la prisión preventiva procede cuando el juez dicta el auto de procesamiento, salvo que confirmare en su caso la libertad provisional que antes se le hubiere concedido cuando: 1º) Al delito o al concurso de delitos que se le atribuye corresponda pena privativa de la libertad y el juez estime, prima facie, que no procederá condena de ejecución condicional.; 2º) Aunque corresponda pena privativa de libertad que permita la condena de ejecución condicional, si no procede conceder la libertad provisoria, según lo dispuesto en el artículo 319 del C.P.P.N.

Las disposiciones sobre la prisión preventiva no regirán con respecto a los menores de dieciocho (18) años, siéndoles aplicables las correspondientes normas de su legislación específica (artículo 315 del C.P.P.N).

Mecanismos para inspeccionar los lugares de privación de libertad.

Mecanismo Nacional de Prevención

La ley 26.827 (Boletín Oficial: 11/01/2013) creó el **Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**. Éste pone a la Argentina en sintonía con el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, suscripto por nuestro país en 2004.

El proceso de redacción contó con la participación de más de 20 organismos de derechos humanos y la presencia también de la Procuración Penitenciaria.

La nueva ley instituye el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes que estará integrado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal de Mecanismos Locales, los mecanismos locales y otras instituciones interesadas en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo.

Por otro lado, prevé que el monitoreo esté a cargo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, que tendrá entre otras facultades la de realizar visitas regulares o extraordinarias a los lugares de detención en todo el país. El Comité Nacional también actuará como órgano rector, articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes.

El Comité contará con 13 miembros: seis representantes parlamentarios –no legisladores–, dos por la mayoría y uno por la primera minoría de cada Cámara del Congreso; el procurador penitenciario, y dos representantes de los mecanismos de prevención locales, elegidos por el Consejo Federal de mecanismos locales, también creado por la ley. Además se elegirán tres representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a esta problemática, que deberán pasar por audiencias públicas y ser aprobados por ambas Cámaras del Congreso. Por último, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que no será tampoco un miembro de la secretaría.

Más allá de ese debate, que se saldará a la hora de su conformación concreta, el Comité tendrá amplias facultades para realizar visitas sorpresivas a todo lugar de alojamiento forzoso, recopilar y sistematizar información sobre la situación de personas privadas de la libertad. También podrá requerir documentación, reunirse con familiares de las personas privadas de libertad; citar a funcionarios o empleados de los lugares de encierro, entre otras atribuciones. Se creará también un registro nacional de casos de tortura y un registro de acciones judiciales de hábeas corpus motivadas por el agravamiento de las condiciones de detención.

Otros Mecanismos de Monitoreo a lugares de detención

- **Procuración Penitenciaria de la Nación**

La Procuración Penitenciaria de la nación constituye un mecanismo independiente de monitoreo de cárceles federales. Este organismo tiene un mandato específico para visitar periódicamente cárceles federales y otros

centros de detención federales con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Las visitas son periódicas y no anunciadas. Su competencia se limita a los establecimientos comprendidos en el Sistema Penitenciario Federal y a todos los centros de detención relativos a la jurisdicción federal, comprendidos comisarías alcaldías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de libertad por la jurisdicción federal o nacional (art. 1 y 15 de la Ley N° 25.875). También tiene competencia para visitar cárceles provinciales (previo convenio o asentimiento expreso de las autoridades provinciales –art. 16-) cuando en las mismas se encuentren detenidos procesados y condenados por la justicia nacional o federal.

La Procuración Penitenciaria ha diseñado un procedimiento para monitorear lugares de detención federales: *“Procedimiento para el Monitoreo de Establecimientos Penitenciarios Federales”* (Resolución N° 36/09 PP).

Este procedimiento constituye el Protocolo Marco del Organismo para la realización de auditorías, con la intención de hacer posible relevamientos uniformes acerca de los diversos establecimientos carcelarios que conforman el sistema federal, pudiendo establecer a través de esta herramienta procesos comparativos entre ellos. El instrumento brinda ciertas pautas generales de monitoreo que permiten evaluar el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de libertad dentro de los establecimientos carcelarios federales y posibilita la obtención de datos precisos de vulneración de derechos. Para su elaboración se tuvo en cuenta la experiencia de organismos internacionales que visitan lugares de detención, tomando como base la guía de monitoreo de la APT, adaptándola a la realidad argentina y creando de esta forma, una propia.

De esta forma, se creó el área de Auditoría, conformada por profesionales de diferentes formaciones, destinada a detectar vulneraciones a los derechos humanos. Resulta fundamental para la tarea propuesta contar con un área específica que primordialmente, efectúe relevamientos sistemáticos tendientes a constatar el cumplimiento de las obligaciones que la administración penitenciaria tiene a su cargo.

- **Defensoría General de la Nación. Comisión Cárceles**

La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación fue creada por Resolución D.G.N. N°158/98. Tiene por misión institucional... “verificar las condiciones de alojamiento, alimentación, y atención médica de los internos en distintas unidades carcelarias...”. Desde el año 2007, la titularidad de la Comisión es desempeñada por Defensores Públicos Oficiales a modo de Co- titulares

La Comisión se desempeña con carácter subsidiario y complementario a la actividad propia de cada Defensor Público Oficial, realizando tareas de apoyo ante las solicitudes, reclamos y/o propuestas de los detenidos. En una segunda etapa se desarrollan actividades de control y examen de contextos de detención en diversos establecimientos penitenciarios del país.

- **Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.**

El Ministerio de Seguridad de la Nación cuenta con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que es gestionado por la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales. Registra todos los casos a nivel nacional de personas desaparecidas y extraviadas; como también los casos de personas halladas con identidad desconocida (NN). Dicho Ministerio cuenta con el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) que permite la comunicación a nivel nacional (todos los cuerpos policiales provinciales y fuerzas de seguridad federales y Migraciones) de todos los casos de personas desaparecidas, en tiempo real. Esto es importante para que la autoridad de aplicación pueda conocer las circunstancias que rodean la ausencia de las personas, para entender el fenómeno, por regiones y poder confeccionar las políticas públicas pertinentes.

- **Registro Nacional de Reincidencia** (Ley N° 22.117 y sus modificatorias).

Todos los tribunales del país con competencia penal deben remitir, dentro de los cinco días de quedar

firme, los autos de prisión preventiva u otra medida equivalente que establezcan los Códigos Procesales, como así también las sentencias condenatorias y su forma de cumplimiento (artículo 2º, incisos b) e i). Las unidades penitenciarias del país deben comunicar a este Registro el egreso de todo condenado.

Como ya fuera señalado anteriormente, el derecho de toda persona con un interés legítimo a acceder a la información sobre una persona privada de su libertad se encuentra amparado en el artículo 43 último párrafo de la Constitución Nacional mediante la acción de habeas corpus.

A su vez, la ley n° 23.098 regula el hábeas corpus, que consiste en un procedimiento judicial rápido y sencillo que permite obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente de cualquier persona privada de su libertad.

La presente acción puede ser iniciada por el detenido, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes, hermanos o sus representantes legales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Juez de Instrucción.

El magistrado interviniente se pronunciará en un plazo de 24 hs desde la admisión del trámite del procedimiento sobre si la detención o arresto y las condiciones en las que se ha desarrollado el mismo han sido o no legales. Es así que el juez podrá acordar la puesta en libertad del detenido, si fue privado ilegalmente de su libertad; que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la detentaban; o que el detenido sea puesto a disposición judicial, si ya hubiere transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención.

No existen restricciones al ejercicio de este derecho. La Constitución establece que esta acción puede interponerse aún durante la vigencia de un estado de sitio.

A nivel nacional no hay leyes que determinen una restricción al acceso a la información sobre las personas privadas de libertad a quienes posean un interés legítimo sobre ellas.

Cabe remitirse aquí también a lo expresado ut supra respecto de los derechos que el Código de procedimiento penal acuerda al imputado, en donde se determina que tanto *el imputado o sus familiares podrán formular sus instancias por cualquier medio ante el funcionario encargado de la custodia, el que las comunicará inmediatamente al órgano judicial competente.* (Art. 72 C.P.P.N)

Asimismo, cabe recordar que el imputado podrá designar defensor aún estando incomunicado y por cualquier medio. Está contemplada la defensa permanente del imputado ya que en ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa y dejar a sus clientes sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor oficial (artículo 112 C.P.P.N)

En cuanto a los recursos que pueden interponerse contra la negativa a divulgar información sobre personas privadas de libertad, cabe remitirse aquí a lo señalado anteriormente respecto de la acción de hábeas corpus regulada tanto en el artículo 43 de la Constitución Nacional como en la ley n° 23.098.

Dicha norma procede cuando se limita o amenaza la libertad ambulatoria sin orden de autoridad competente o se agrava la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad.

La acción de habeas corpus puede ser interpuesta por la víctima o cualquier personas a su favor, con el fin de que cese la amenaza ilegítima, la privación ilegítima o que se reestablezcan las condiciones que correspondieran a la privación de la libertad en caso de ser esa legítima.

En cuanto a las sanciones a los funcionarios públicos, el artículo 143 del Código Penal de la Nación establece que en caso de que un funcionario retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido

decretar o ejecutar, prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a disposición del juez competente; incomunicare indebidamente a un detenido; así como el jefe de prisión u otro establecimiento penal, o el que lo reemplace, que recibiera algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena o lo colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto; el alcaide o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito; el funcionario competente que teniendo noticias de una detención ilegal omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver; será reprimido con reclusión o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo.

- **Definición de víctima en la legislación nacional:**

Conforme la legislación penal vigente el concepto de víctima, o sujeto pasivo de un delito, es aquél que sufre las consecuencias directas descriptas en la norma. Se trata de la víctima material, esto es, aquella que resulta privada de su libertad y que con frecuencia sufre además la violación de su integridad personal, derecho a la vida y otros derechos humanos fundamentales.

Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que el artículo 1079 del Código Civil de la Nación, establece la obligación de reparar el daño causado por un delito, respecto de aquel que ha resultado directa e indirectamente damnificado. Es decir que los familiares de la víctima material de la desaparición forzada que hubieren padecido un estado de angustia y sufrimiento psicológico causados por la incertidumbre en cuanto a la suerte o paradero de sus seres queridos pueden realizar un reclamo civil ante las autoridades judiciales competentes.

Por otra parte y en cuanto a los mecanismos que garantizan el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, cabe tener presente que todo proceso judicial es público, por lo que las sentencias son de libre acceso. Toda víctima en un proceso de investigación judicial tiene amplio derecho a conocer las circunstancias y avances del expediente.

Toda víctima tiene la facultad de ser parte en el proceso que se investiga el hecho que padeció. Dicha facultad se encuentra regulada en el artículo 82 del C.P.P.N. al disponer que:

“Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan.

Cuando se trate de un incapaz, actuará por él su representante legal.

Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, podrán ejercer este derecho el cónyuge supérstite, sus padres, sus hijos o su último representante legal.

Si el querellante particular se constituyera a la vez en actor civil, podrá así hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos institutos.”

A su vez, el artículo 82 bis fue incorporado al C.P.P.N en cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa celebrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la petición “Inocencia Luca de Pegoraro”.^[7] Dicha disposición establece que *“las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa, humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados.”*

En cuanto a la legislación nacional aplicable a *la apropiación de niños víctimas de desapariciones forzadas, de niños cuyos padres hayan sido víctimas de una desaparición forzada y de niños nacidos durante el cautiverio de madres que hayan sido víctimas de una desaparición forzada*, se informa que el Código Penal de la Nación establece la pena de prisión perpetua si la víctima de la privación de libertad

seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona (artículo 142 ter, primer párrafo) fuere una mujer embarazada o un menor de dieciocho (18) años de edad; o cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre (artículo 143ter, segundo párrafo).

Asimismo, el artículo 146 del Código Penal de la Nación establece que *será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.*

[1] Para mayor información sobre la presente disposición legal u otras normas legales mencionadas en el presente informe se sugiere consultar la información legislativa contenida en el sitio web del Centro de Documentación e Informática del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MECON-INFOLEG), disponible en: <http://infoleg.mecon.gov.ar/>

[2] Ley n° 26.200 publicada en el Boletín Oficial el 9 de enero de 2007.

[3] En efecto, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas adoptada por la Asamblea General de la OEA el 9 de junio de 1994, fue aprobada por la ley n° 24.556 del mes de septiembre de 1995 y publicada en el Boletín Oficial el 11 de octubre de ese mismo año. Esta Convención entró en vigencia en el ámbito internacional y también respecto a Argentina el 28 de marzo de 1996. La ley n° 24.820 (publicada en el Boletín Oficial el 29 de mayo de 1997) le concedió jerarquía constitucional. Por su parte, la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006, fue aprobada por ley n° 26.298 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de noviembre de 2007. Esta Convención entró en vigencia en el ámbito internacional y también respecto a Argentina el 23 de diciembre de 2010.

[4] CSJN, Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros, La Ley 1992-C, 543.

[5] Artículos 80, 142, 142 bis, 143, 144bis, 144ter, 146 y 170 del Código Penal de la Nación (CPN). Véase también lo dispuesto por el artículo 170 del CPN en relación al delito de extorsión.

[6] CSJN, fallo “*Simón, Julio Héctor y otros; Poblete Roa, José Liborio y otros- causa n° 17.768 - recurso de hecho*”, del año 2005.

[7] Acuerdo de Solución Amistosa de fecha 11 de septiembre de 2009 firmado entre el Gobierno Nacional y el peticionario en el marco de la petición N° P-242-03 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Buenos Aires, 19 de noviembre 2009.

Saludo a Ud. muy atentamente



I. INTRODUCCIÓN. ACLARACIONES PRELIMINARES

El presente documento ha sido elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina (en adelante, MPF)¹, con el objetivo de contribuir con la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y con la Dirección de Derechos Humanos y Temas de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, para la elaboración del informe dirigido al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Concretamente, se responde el *"Cuestionario para Estados. Estudio del GTDFI sobre normas y políticas públicas sobre la investigación efectiva de desapariciones forzadas"*, y se brinda información en el marco de las funciones y competencias específicas de este organismo.

Antes de comenzar a responder el cuestionario, resultan indispensables algunas aclaraciones preliminares sobre el ámbito de intervención del MPF, que ayudarán a comprender mejor el alcance de las respuestas brindadas.

En tal sentido, por imperio constitucional, el MPF es un órgano autónomo e independiente dentro del sistema de administración de justicia nacional, también compuesto por el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa. Su rol específico es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Se encarga de velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, a la vez que procura el acceso a la justicia de todas las personas que habitan el país².

¹ Para la confección de este informe también se contó con la colaboración de otras dependencias del MPF que tienen competencias en estos temas, en particular la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

² El artículo 120 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: "El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones".



La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (la ley n° 24.946³ fue modificada por la ley n° 27.148, en adelante también LOMPF⁴) le confiere al organismo, entre otras, dos funciones principales: a) promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y b) velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes (art. 1). Asimismo, según el art. 9, inc. c de la ley, uno de los principios rectores del MPF es el de bregar por el respeto y garantía de los derechos humanos. Este mandato atraviesa y guía la mayor parte de las actividades cuyo desenvolvimiento se le encomienda al MPF, tanto en materia penal como no penal.

Específicamente, en materia penal la Ley Orgánica le asigna al MPF las funciones de fijar la política de persecución penal y ejercer la acción penal pública, conforme lo establece el Código Procesal Penal de la Nación y las leyes complementarias, en todos los delitos federales y en aquellos delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras su competencia no haya sido transferida a la jurisdicción local (art. 65 del Código Procesal Penal de la Nación, art. 3 de la ley n° 27.148, arts. 25, inc. c) y 33, inc. e) de la ley n° 24.946).

En el orden de los delitos federales y los delitos de competencia de la justicia nacional, en lo criminal y correccional, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el proceso penal se continúa rigiendo por un sistema mixto, con un marcado rasgo inquisitivo durante la etapa de instrucción, por lo que es el juez competente quien, salvo algunos supuestos, ejerce la dirección de la investigación de los hechos que aparezcan cometidos en su circunscripción judicial (art. 194 del Código Procesal Penal de la Nación). Si bien por las leyes n° 27.063 y 27.482 se modificó el Código Procesal Penal, adoptando un sistema acusatorio, en el que los fiscales tendrán un rol primordial en la investigación de los delitos denunciados, su implementación progresiva se encuentra supeditada a un cronograma que deberá ser definido en el ámbito del Congreso de la Nación.

En ese marco son acciones esenciales del MPF, para el impulso de la acción penal pública, requerir la instrucción (investigación judicial) ante la denuncia de un delito (art. 188 del CPPN), dictaminar respecto de si la instrucción está completa y, en su caso, solicitar la

³ Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación (aplicable para el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, sancionada en el año 1998), disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/49874/texact.htm>

⁴ Disponible en http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2013/09/Ley_organica_2015.pdf



elevación de la causa a juicio o el sobreseimiento de los imputados (art. 347 del CPPN); y hacer una valoración sobre los hechos, pruebas, calificación jurídica y responsabilidades en la etapa de discusión final o alegatos del juicio oral y público (art. 393 del CPPN). Más allá de esas medidas necesarias, el MPF también podrá solicitar la declaración de testigos y de los propios imputados, requerir otras medidas probatorias, pedir medidas cautelares, etc., así como dictaminar respecto de cada petición de parte que deba ser sustanciada en el marco de un proceso penal.

Existen determinados supuestos en los que la dirección de la investigación del caso quede en cabeza del MPF. En ese sentido, el artículo 196 del Código Procesal Penal otorga a los/as jueces/zas la facultad de decidir la delegación de la instrucción en el/la agente fiscal. Los/as agentes fiscales también deberán intervenir previamente en la investigación delitos que hayan sido denunciados directamente ante ellos (art. 196, 2° párrafo del CPPN). No obstante, en los casos por hechos que no tengan autor individualizado, la dirección de la investigación quedará desde el inicio de las actuaciones delegada al MPF, con noticia al juez/za competente en turno. Del mismo modo deberá procederse en los casos donde se investiguen los delitos de secuestro (art. 142 bis del Código Penal) y secuestro extorsivo (artículo 170 del Código Penal), que presentan agravantes cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.

Dado el carácter federal del sistema de gobierno argentino, debe advertirse que la competencia del MPF y, por ende, la actuación de cada uno de sus dependencias y magistrados/as, se circunscribe al ámbito de la justicia federal —en lo concerniente a la persecución de delitos federales, tales como la desaparición forzada, la trata de personas o la narcocriminalidad, por ejemplo— y al ámbito de la justicia ordinaria sólo en algunos delitos comunes —por ejemplo los homicidios o los delitos contra la integridad sexual, entre otros— acaecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este marco, se ha decidido contestar sólo aquellas preguntas del cuestionario de referencia que están estrictamente relacionadas con la actuación del MPF. Al respecto, y tal como se ha dicho, el MPF actúa junto con —aunque de manera autónoma— el resto de los/as operadores/as del sistema de administración de justicia en la implementación del marco jurídico que rige en la Argentina, a través de la adopción y puesta en marcha de diferentes respuestas institucionales que serán detalladas en el documento, siempre en el ámbito de acción delimitado por las normas procesales y la LOMPF.

MA. ANGELLES RAMOS
FISCAL FEDERAL

PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

Finalmente, desde el MPF celebramos la decisión de continuar profundizando los estudios en la materia, como una herramienta para consolidar y seguir desarrollando los estándares del sistema universal de protección de derechos humanos en esta temática y producir un nuevo informe del Grupo de Trabajo sobre normas y políticas públicas para la investigación efectiva de desapariciones forzadas. Estos estándares resultarán de relevancia para llevar adelante la labor encomendada a esta institución, en tanto ayudarán a precisar pautas de actuación más eficaces para los/as operadores/as judiciales que intervienen en los casos, como los/as fiscales de este MPF.

II. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

- 1) Please indicate whether there is a specific and autonomous crime of enforced disappearance in your criminal legislation meeting the elements contained in the definition of the 1992 Declaration and the 2006 Convention on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance. If so, please provide details on the relevant legislative provisions.

El delito de desaparición forzada en Argentina fue incorporado al Código Penal —art. 142 ter— por la ley n° 26.679⁵, sancionada en 13 de abril de 2011.

Dicha norma estableció, además, la *competencia de la justicia federal* para la persecución penal de este ilícito, a la vez que dispuso que no se podrá disponer el archivo de las causas en que se investigue una desaparición forzada hasta tanto la persona no hubiera sido hallada o se hubiera restituido su identidad.

Además, la referida ley definió que se trata de un *delito de acción pública* que los/as fiscales federales de todo el país tienen la obligación de investigar, aún de oficio.

ARTICULO 142 ter. - *Se impondrá prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.*

⁵ Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181888/norma.htm>



La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de DIECIOCHO (18) años, una persona mayor de SETENTA (70) años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre.

La escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida.

Existen otras dos figuras penales que, en aquellos supuestos en los que no pueda comprobarse la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, podrían ser utilizadas de manera subsidiaria para cubrir un eventual espacio de impunidad en casos de desapariciones causadas por funcionarios públicos o agentes de las fuerzas armadas o de seguridad. Estos son los artículos que prevén y reprimen el secuestro y el secuestro extorsivo, previstos en los artículos 142 bis y 170 del Código Penal.

ARTICULO 142 bis. - *Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años.*

La pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión:

- 1. Si la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho (18) años de edad; o un mayor de setenta (70) años de edad.*
- 2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un hermano; del cónyuge o conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto particular.*
- 3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.*
- 4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma.*
- 5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.*
- 6. Cuando participaran en el hecho tres (3) o más personas.*

La pena será de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión a reclusión si del hecho resultara la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor.

La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida.

La pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del logro del propósito del autor, se reducirá de un tercio a la mitad.

ARTICULO 170. - *Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años.*

La pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión:

MA. ANGELES RAMOS
FISCAL FEDERAL
PROCURADURÍA DE NIÑEZ CONTRA LA VIOLENCIA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1. Si la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho (18) años de edad o un mayor de setenta (70) años de edad.
 2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un hermano; del cónyuge o conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto particular.
 3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.
 4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada; enferma; o que no pueda valerse por sí misma.
 5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público; o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.
 6. Cuando participaran en el hecho tres (3) o más personas.
- La pena será de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor.
- La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida.
- La pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del pago del precio de la libertad, se reducirá de un tercio a la mitad.

Ahora bien, dado a que actualmente continúan siendo investigadas y juzgadas por la justicia federal de nuestro país numerosos casos por hechos cometidos durante la última dictadura cívico-militar que sufrió el país (1976-1983), en donde se produjeron miles de desapariciones forzadas, y teniendo en cuenta que la nueva tipificación penal tuvo lugar recién en el año 2011, se debe aclarar que los hechos perpetrados antes de la tipificación penal del delito de desaparición forzada, en general, son encuadrados por la justicia bajo la figura de la privación ilegítima de la libertad⁶.

⁶ En oportunidad de dictaminar en un caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ex Procurador General de la Nación, en el año 2002, sostuvo que el delito de privación ilegítima de la libertad contiene una descripción típica lo suficientemente amplia como para incluir también aquellos casos de desaparición forzada de personas. Esto significa que la desaparición forzada, al menos en lo que respecta a la privación de la libertad que conlleva, ya se encontraba prevista en la legislación interna como un caso específico del delito —más genérico— de los artículos 141 y, particularmente, 142 y 144 *bis* y *ter* del Código Penal. Dicho criterio fue compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, en dicho precedente, el Alto Tribunal resaltó que “(...) para la época de los hechos imputados el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. Esto obedece a que la expresión desaparición forzada de personas no es más que un *nomen iuris* para la violación sistemática de una multiplicidad de derechos humanos, a cuya protección se había comprometido internacionalmente el Estado argentino desde el comienzo mismo del desarrollo de esos derechos en la comunidad internacional una vez finalizada la guerra (...)”. La Corte también expresó que “(...) los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos, pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, porque atentan contra el derecho de gentes tal como lo prescribe el art. 118 de la Constitución Nacional...”, y que su carácter de imprescriptibles se deriva de la costumbre internacional que el Estado argentino había contribuido a formar en esa dirección con antelación a la ocurrencia de los hechos amparados en las leyes en análisis (CSJN, causa



- 2) If the answer to question n° 1 is negative, please indicate how acts of enforced disappearances are or could be currently qualified and dealt with in your criminal legislation and whether the introduction of a specific crime is envisaged.

No se responde, ya que en la respuesta anterior se describieron las tipificaciones específicas.

- 3) Please inform whether the statute of limitations applies for crimes of enforced disappearances or proposed to be applied in future legislation criminalizing enforced disappearances? If so, please indicate the duration of the statute of limitations and the moment from which it commences to count.

En lo que respecta a la prescripción (*statue of limitations*), el artículo 59 del Código Penal la incluye como una de las causales expresas para la extinción de la acción penal. Las reglas la prescripción, para todos los delitos tipificados en el Código Penal y las leyes especiales, se encuentran previstas en los artículos 62, 63 y 67 del código de fondo.

El artículo 62 fija los plazos para la prescripción, estableciendo que: *"La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; 2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años; 3º. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua; 4º. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal; 5º. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa."*

Por su parte, el artículo 63 determina el momento en que empieza a correr el plazo para el cómputo de la prescripción, refiriendo que: *"La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse. En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine—, y 130 —párrafos segundo y tercero— del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día*

Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. -causa N° 17.768-", sentencia del 14 de junio de 2015; Fallos 328:2056).

en que éste haya alcanzado la mayoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad”.

Finalmente el artículo 67 determina las causales de suspensión e interrupción del plazo de prescripción, estableciendo que: *“La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso. La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional. La prescripción se interrumpe solamente por: a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme. La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo”.*

A partir del caso “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros -causa n° 259” (Fallos 327:3312), la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, aún antes que la República Argentina adhiriera a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, por considerar que aquellos hechos ya eran imprescriptibles para el derecho internacional al momento de cometerse. Esta posición es la que continúa vigente hasta la fecha.

Dicha convención, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, fue aprobada por el Estado argentino mediante la ley n° 24.584 del 1° de noviembre de 1995.



4) Please indicate whether anyone has been convicted for the crime of enforced disappearance in your country.

La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad⁷ se encuentra trabajando en desagregar su registro de sentencias en relación con la condena u absolución de los imputados por cada uno de los delitos por los que fueron acusados, y para cada una de las víctimas en perjuicio de las cuales se cometieron los crímenes. Este nuevo enfoque de sistematización aún se encuentra en construcción, y a enero de 2019 se ha completado para 155 sentencias, que representan el 71% del total de las dictadas en todo el país por crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con estos registros preliminares, son 8 los imputados condenados por el delito de desaparición forzada cometidas durante la última dictadura cívico-militar, en el marco de tres causas. Sin embargo, es importante destacar que, tal como ha sido mencionado en la respuesta a la pregunta 1 de este cuestionario, en general los casos de desaparición forzada de ese período fueron encuadrados en el tipo penal de “privación ilegítima de la libertad”. Si consideramos las condenas por este delito, los datos muestran que son 429 los condenados, en el marco de 109 sentencias. Y aunque, como se dijo, no es posible medir la totalidad del universo, los datos evidencian que se ha condenado al menos a una persona por este delito en el 70% las sentencias sistematizadas.

Por otro lado, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)⁸ observa que del total de las sentencias condenatorias sistematizadas por el delito de trata de personas, en el 36,8% de los casos se detectó algún tipo de privación de la libertad. No obstante, se debe aclarar que en estos casos no se aplicó el tipo penal de la desaparición forzada.

En relación con las causas judiciales actualmente en trámite ante la justicia federal que tienen por objeto la hipótesis de desaparición forzada de personas, y de acuerdo con la información que obra en este MPF⁹, a la fecha de cierre de este documento existen al menos 10 causas judiciales en las que se investigan 10 casos de desaparición forzada de personas¹⁰.

⁷ En la respuesta 5 de este cuestionario se aporta información sobre esta dependencia especializada del MPF.

⁸ En la respuesta 5 de este cuestionario se aporta información sobre esta dependencia especializada del MPF.

⁹ Esta información surge de los relevamientos que realizan en forma cotidiana las diversas áreas especializadas del organismo que trabajan estas temáticas, como son la PROCUVIN y la DGDH.

¹⁰ Entre estas causas amerita informar especialmente la que investiga la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco, presuntamente perpetrada por personal de la Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe. Los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2014 y su cuerpo fue hallado un mes después. Si bien aún no se registran condenas en la causa judicial, resulta emblemática debido al gran número de personas imputadas. En efecto,



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

En lo que hace al estado procesal de las causas, solo en uno de estos procesos se llegó a la instancia de juicio oral y público¹¹. La sentencia se dictó el 6 de julio de 2016, en la que 2 funcionarios policiales provinciales (de la Policía de Chubut) fueron condenados como partícipes necesarios de la desaparición forzada investigada en tanto que el resto de los imputados fue absuelto. Más recientemente, el 26 de septiembre de 2018, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó realizar un nuevo juicio oral para tres de los imputados que habían sido absueltos, y confirmó las dos condenas y tres de las absoluciones dictadas por el tribunal. Las demás causas se mantienen en la instancia de instrucción.

5) Please indicate whether there are special units in the law-enforcement and/or prosecution authorities in charge of the investigation of enforced disappearances. If so, please provide the name of the units and indicate their composition including whether these special units are staffed with professional from different disciplines, including forensic sciences, anthropology and psychology. If not, please explain who is in charge of investigating or prosecuting enforced disappearances.

En el ámbito del MPF existen estructuras que, aunque no abordan en forma exclusiva el delito de desaparición forzada, constituyen iniciativas concretas para hacer frente a este fenómeno, así como para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

En primer lugar, la **Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH)**¹² tiene entre sus principales objetivos institucionales disponer la realización de investigaciones preliminares en casos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos que hayan tenido lugar durante el terrorismo de Estado; diseñar estrategias para detectar y profundizar la investigación sobre casos en los que medie responsabilidad de actores civiles involucrados con el terrorismo de Estado; constituir la mesa de discusión con actores institucionales y sociales involucrados en el proceso de verdad y justicia; y realizar el monitoreo, la medición

hay 18 personas imputadas, 16 de ellas por el delito de desaparición forzada. La causa tramita ante el Juzgado Federal de Rosario N° 3 e interviene la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 1 de Rosario.

¹¹ Se trata del juicio en el que se investigó la desaparición forzada de Iván Torres (Expte. FCR 12007020/2005/TO1, caratulado "Tilleria, Fabián Alcides y otros s/privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 1)" del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, sentencia del 6 de julio de 2016).

¹² Esta Procuraduría se creó por la Resolución PGN N° 1442/13 (y se encuentra receptada en el art. 22 de la ley n° 27.148) en reemplazo de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado —Resolución PGN N° 14/07—, con una estructura reforzada y nuevas herramientas de trabajo. La Resolución PGN N° 1442/13 está disponible en <https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-1442-2013-001.pdf>. Para más información sobre esta dependencia, ver <https://www.mpf.gov.ar/lesa/>



y el análisis estadístico del proceso de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Esta Procuraduría se encuentra bajo la dirección de una fiscal y está organizada con una coordinación general y cuatro áreas temáticas: *Litigio Estratégico; Análisis Técnico, Archivo y Estadísticas; Relaciones Institucionales y Administración*. Cada una de estas áreas está a cargo de un/a coordinador/a encargado/a de instrumentar las funciones específicas, mientras que la coordinación general se encarga de la asignación de tareas a cada una de ellas, así como de su priorización, monitoreo de desarrollo y evaluación. Asimismo, acompaña las tareas de seguimiento de causas y organiza las respuestas a las consultas provenientes de las fiscalías.

El equipo de trabajo de la PCCH está integrado por profesionales y estudiantes de distintas disciplinas lo que contribuye positivamente al desarrollo de los objetivos —abogados/as, sociólogas, antropólogo/as, historiadores, licenciadas en ciencia política y en comunicación—.

Esta Procuraduría además cuenta con una *Unidad Fiscal de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado*¹³, dedicada a colaborar en la investigación y juzgamiento de estos casos.

En segundo lugar, debemos mencionar a la **Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)**¹⁴. La PROTEX se creó con el objetivo de asistir en el diseño de la política criminal del organismo en la materia y de prestar apoyo a las fiscalías de todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo, trata de personas, explotación de personas y delitos conexos a la trata. Esta dependencia especializada tiene entre sus ejes de actuación: recibir denuncias y resolver las medidas necesarias para intervenir en casos vinculados con el delito de trata de personas; colaborar con las fiscalías y unidades del organismo que así lo requieran; diseñar programas y estrategias de investigación y persecución del delito de trata; realizar investigaciones preliminares; coordinar actividades de cooperación,

¹³ Esta Unidad se creó por medio de la Resolución PGN N° 435/12 (y también fue reconocida en el art. 22 de la ley n° 27.148), disponible en <http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2012/PGN-0435-2012-002.pdf>

¹⁴ Esta Procuraduría se creó por medio de la Resolución PGN N° 805/2013 —y se encuentra receptada en el art. 22, inc. f, de la ley n° 27.148—, en reemplazo de la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), jerarquizando su estructura y manteniendo sus competencias principales en materia de trata y explotación de personas, con fines sexuales o laborales. La Resolución PGN N° 805/2013 está disponible en <https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/pgn-0805-2013-001.pdf>. Para más información sobre esta dependencia ver <https://www.mpf.gob.ar/protex/>

MA. ANGELES RAMOS
FISCAL FEDERAL
PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

sensibilización y capacitación a fin de hacer más visible y prevenir la trata de personas y la explotación sexual y laboral.

Su estructura interna está organizada en dos áreas específicas: por un lado, el *Área institucional, de capacitación y estadísticas* encargada de la recopilación de datos de expedientes judiciales para la elaboración de informes sobre la dinámica del delito de trata en el país; de la organización de actividades de capacitación, entrenamiento y sensibilización; del diseño e implementación de programas y herramientas de investigación y persecución penal; entre otros. Por otro lado, el *Área de investigación, litigación y seguimiento de casos* tiene a su cargo la función de intervenir como investigador principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de su competencia; participar en expedientes que tengan por objeto la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente aquellas cuya desaparición podría haberse motivado en un hecho de trata de personas; recibir denuncias por el delito de trata de personas; formar investigaciones preliminares para profundizar en la corroboración de los hechos denunciados; entre otros.

La PROTEX cuenta con profesionales formados en derecho, ciencias políticas, psicología, comunicación, contabilidad, antropología, arqueología e informática.

Por su parte, se encuentra la **Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN)**¹⁵. La PROCUVIN se creó en el año 2013 con el propósito de dar mayor visibilidad e incidir sobre el fenómeno de la violencia institucional, para dotar al MPF de dispositivos más eficientes para la investigación y el juzgamiento de delitos cometidos por agentes estatales en ámbitos de privación de la libertad o por fuerzas policiales y/o de seguridad en el ámbito de intervención de competencia de la justicia nacional y federal; entre ellos, el delito de la desaparición forzada de personas.

La PROCUVIN tiene por objetivo central el avance en la prevención, investigación y eventual sanción a hechos de violencia perpetrados por acción, omisión o anuencia de funcionarios de policías, fuerzas de seguridad y penitenciarias en las que sean competentes los órganos de la justicia nacional o federal de la República Argentina. Por ello, las principales funciones de esta dependencia son las de promover el desarrollo de estrategias de actuación y

¹⁵ La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) se creó por medio de la Resolución PGN N° 455/13, disponible en <https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/pgn-0455-2013-001.pdf>, y fue receptada en la Ley Orgánica del MPF (art. 22, inc. g). Para más información sobre esta dependencia del MPF, ver <https://www.mpf.gob.ar/procuvn/>



seguimiento en casos de violencia institucional; colaborar con las fiscalías que intervienen en estos casos en las diferentes instancias judiciales y realizar inspecciones de monitoreo en espacios de privación de libertad.

Su equipo de trabajo se conforma por profesionales de distintas disciplinas (incluye abogados/as, psicólogas, trabajador social y sociólogos) que se desempeñan bajo una estructura organizacional de tres áreas fundamentalmente jurídicas: *Violencia policial*, *Violencia en Instituciones de Encierro*, *Litigio Estratégico y Relaciones Institucionales*; y un área no jurídica denominada *Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias*. Cada una de estas áreas, está a cargo de un Secretario Coordinador encargado de instrumentar las funciones específicas bajo la coordinación general que lleva adelante el Fiscal General Adjunto.

6) Do these special units have the competence to initiate investigation of cases of potential enforced disappearances, even if no formal complaints have been made? Please describe how, and which time frame, an alleged or potential case of enforced disappearance is investigated from the outset.

La LOMPF establece que las procuradurías especializadas tienen competencia para iniciar investigaciones preliminares vinculadas con hechos relacionados con la temática que justificó su creación y puesta en funcionamiento (art. 24, ley nº 27.148).

En tal sentido, las distintas procuradurías con competencia para intervenir en casos que involucran la desaparición de personas pueden investigar los hechos ocurridos sin que medie una denuncia formal. Así es que la PCCH, la PROTEX y la PROCUVIN realizan investigaciones preliminares y genéricas de oficio, a la vez que colaboran en las distintas etapas de los procesos judiciales en curso e, incluso, en muchos casos sus respectivos titulares intervienen como fiscales coadyuvantes en algunas causas en la que se investigan hechos que involucran la desaparición de personas.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que aunque la desaparición forzada es un delito de acción pública, en los hechos el MPF no suele actuar de oficio en estos casos; pues en general las investigaciones surgen a raíz de la denuncia, incluso informal, de algún familiar o allegado. Esto es, no se inician búsquedas en abstracto. Sin perjuicio de ello, en algunas ocasiones las áreas especializadas promueven la investigación preliminar de la desaparición de una persona cuando, por ejemplo, existe alguna denuncia que no fue debidamente

MA. ANGELES RAMOS
FISCAL FEDERAL
PROCURADURÍA DE CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

recibida en dependencias policiales, o cuando la presunta desaparición surge como un hecho adicional en el marco de una causa judicial que se sustancia por algún otro ilícito.

Por último, amerita informar que la PROTEX tiene el mandato específico de gestionar los acuerdos de cooperación con los organismos públicos o privados, nacionales o locales que puedan resultar de utilidad para el hallazgo de personas desaparecidas y/o para tomar conocimiento de casos de personas que no pueden ser halladas. Además, dicha procuraduría tiene la función de realizar las acciones que resulten pertinentes para el desarrollo o provisión de las herramientas informáticas necesarias para administrar esa información de un modo provechoso para la búsqueda de personas desaparecidas¹⁶.

7) Do the authorities investigating cases of enforced disappearances have the necessary powers and resources to conduct the investigation, including powers to compel the attendance of witnesses and the production of relevant documents, including polices, military and intelligence files? Are all archives potentially containing information relevant for the investigation accessible to the investigating authorities?

Actualmente en el ámbito de la justicia federal y nacional de Argentina rige aún el Código Procesal Penal de la Nación sancionado en el año 1991¹⁷, que establece un sistema de enjuiciamiento criminal mixto, en el cual los/as fiscales no son los titulares de la acción penal y es el/la juez/a “de instrucción” quien investiga los presuntos delitos, a menos que él/ella decida delegar la investigación en el/la fiscal o cuando no hubiera un autor del delito identificado. En el año 2015 fue promulgado un nuevo Código Procesal Penal¹⁸ que introdujo el sistema acusatorio y adversarial a la justicia federal, en el cual los/as fiscales asumen la conducción y dirección de las investigaciones. La implementación de este Código se suspendió mediante el DNU N° 257/15. En el año 2018, este Código Procesal Penal acusatorio —que aún no está implementado— fue reformado parcialmente¹⁹.

¹⁶ Al respecto ver, Resolución PGN N° 805/2013, disponible en: <https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/pgn-0805-2013-001.pdf>

¹⁷ Ley n° 23.984.

¹⁸ Ley n° 27.063, disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=239340>

¹⁹ Ley n° 27.482, disponible en <https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2019/01/Ley-27.482-Nuevo-C%C3%B3digo-Procesal-Penal-de-la-Naci%C3%B3n.pdf>. A la fecha se espera que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal estudie y defina un cronograma progresivo de implementación, previa consulta con el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.



De este modo, en la medida en que no se implemente el nuevo sistema procesal, las/os fiscales federales sólo tienen la capacidad de disponer la citación de testigos o el acceso a determinados archivos en forma autónoma en la medida en que la investigación se encuentre delegada al MPF, o la causa tramite con el procedimiento de autor desconocido.

Específicamente en el caso de la investigación de casos de desaparición forzada ocurridas durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) suele requerir información a diferentes archivos nacionales en el marco de la tramitación de las respectivas causas judiciales, con el fin de viabilizar con mayor efectividad las consultas de las fiscalías. En términos generales, la experiencia de trabajo en esta materia ha demostrado cierta reticencia de las autoridades competentes a entregar la información que se necesita durante las investigaciones.

En este sentido, la Procuraduría trabaja en forma coordinada con la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, en función de los requerimientos de documentación obrante en los archivos de las Fuerzas Armadas; el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; la Comisión de Memoria Histórica de la Dirección de Derechos Humanos y Temas de Género, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, donde la PCCH participa en carácter de organismo asesor en la Mesa de Archivos para la implementación del Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Documentación para el Esclarecimiento de Graves Violaciones a los Derechos Humanos (MOU Regional); y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales, del Ministerio de Seguridad de la Nación.

8) Please explain the legal framework for the families or the representatives of the disappeared to participate in the investigation and be informed about the results thereof. Please explain if there is any psychosocial support available for the victims during the investigation.

En los últimos años, el MPF ha acompañado activamente el proceso de fortalecimiento del rol de la víctima en el proceso penal, a través de la creación de programas especializados para el acompañamiento y orientación a las víctimas de distintos delitos, y en particular de violencia institucional y policial, y del impulso de pautas de actuación para fiscales.

MA. ANGELES RAMOS

FISCAL FEDERAL

PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN



A tal punto que, dentro de los Principios funcionales establecidos por el artículo 9 de la ley nº 27.148, para el ejercicio de las funciones del MPF, se incluyeron los de: orientación a la víctima (inciso f) y accesibilidad y gratuidad (inciso g), en los siguientes términos: *“El Ministerio ejercerá sus funciones de acuerdo con los siguientes principios:... f) Orientación a la víctima: deberá dirigir sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto. Informará a ésta acerca del resultado de las investigaciones y le notificará la resolución que pone fin al caso, aun cuando no se haya constituido como querellante, conforme a las normas procesales vigentes. Procurará la máxima cooperación con los querellantes. g) Accesibilidad y gratuidad: promoverá los derechos reconocidos a la víctima por la ley, facilitando su acceso al sistema de justicia de manera gratuita”.*

a) El trabajo de la DOVIC

Con el objeto de garantizar a las víctimas y a sus familiares los derechos de orientación e información, se dispuso la creación de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC)²⁰ del MPF. Esta dependencia tiene como objetivo asegurar que las víctimas cuenten con mayor acceso a la información sobre el estado y avances de los procesos penales, así como promover su participación en las distintas etapas del proceso a través del acompañamiento. Con la premisa de garantizar el rol activo de las víctimas durante todo el proceso penal, la DOVIC analiza estrategias de intervención particular para cada caso, teniendo en cuenta los fundamentos de los pedidos de intervención de los/as fiscales y las necesidades de las víctimas.

La DOVIC cuenta con cinco (5) Programas Especiales abocados a la atención de víctimas: el *Programa de Víctimas de Violencia de Género*, el *Programa de Atención Integral a Víctimas en el Proceso Penal*, el *Programa de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Maltrato y Abuso Sexual*, el *Programa de Atención a Víctimas de Trata y Explotación de personas*, y el *Programa Especial para la Atención a Víctimas de Violencia Policial*²¹. Este último es el que intervendría en la atención de las víctimas y los familiares de las víctimas de desaparición forzada.

²⁰ La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas fue creada mediante la Resolución PGN N° 1105/2014, disponible en <https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2014/PGN-1105-2014-001.pdf>. La DOVIC también se encuentra reconocida en la LOMPF (art. 33 inc. a). Para más información sobre la DOVIC, ver <https://www.mpf.gob.ar/dovic/>

²¹ Todos los programas han sido creados por la Resolución PGN N° 1105/2014 con excepción del Programa de Atención Integral a Víctimas en el Proceso Penal, creado mediante la Resolución PGN N° 122/18, disponible en <https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2018/PGN-0122-2018-001.pdf>



Todos los programas se encuentran conformados por equipos interdisciplinarios integrados por abogados/as, psicólogos/as, trabajadores sociales y algunos de ellos también por médicas psiquiatras, antropóloga y socióloga.

Particularmente el *Programa Especial para la Atención a Víctimas de Violencia Policial*, tiene como objetivo implementar un dispositivo de trabajo en red que alcance a todo el MPF, y que brinde asistencia para efectivizar el acceso a los derechos de orientación, información, participación y protección a víctimas y testigos de violencia policial a lo largo de todo el proceso penal. Su actuación se desarrolla siempre junto al/a fiscal que interviene en el caso ya judicializado. La única instancia de intervención prejudicial que puede realizar el Programa es la de acompañar y colaborar con la denuncia judicial de los hechos, así como orientar e informar a las víctimas que se presentan de manera espontánea, cuáles son las posibles alternativas de acción que tiene.

Para cumplir con sus funciones, el Programa cuenta con un *Protocolo de Actuación para la atención a víctimas*, en donde se establecen las pautas y lineamientos a seguir durante todo el proceso penal. Allí se especifican los principios de actuación vigentes para el equipo de trabajo, los criterios y particularidades del abordaje y acompañamiento a la víctima en función de la especificidad del delito y problemática con la que se trabaja y las pautas a seguir durante todo el proceso de actuación hasta la finalización de la intervención, garantizando una atención de calidad con un enfoque de promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas atendidas.

El ámbito de aplicación del protocolo se refiere a la atención de cualquier persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de violencia que provenga de fuerzas policiales o de seguridad, considerando también como víctima a sus familiares y allegadas/os²². En la actualidad, la competencia del Programa Especial se circunscribe a los casos perpetrados por integrantes de fuerzas de seguridad y policiales (Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura) ocurridos dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y cuya competencia corresponda al MPF.

²² Dadas las características específicas que tiene la desaparición forzada de personas, la DOVIC promueve un abordaje que contempla una definición no restrictiva del término "víctima", de manera tal de poder brindar acompañamiento a los familiares y allegados de la persona desaparecida.



b) Sobre el marco jurídico vigente

En cuanto a la normativa vigente en nuestro país, vale la pena resaltar la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (ley n° 27.372²³) y la aprobación del nuevo Código Procesal Penal acusatorio (ley n° 27.063). La sanción de ambas leyes da cuenta de un importante avance en el marco del arribo de la reforma procesal penal que implicará el paso de un sistema mixto, predominantemente inquisitivo en la etapa de instrucción, a otro de neto corte acusatorio adversarial, en el cual la víctima adquirirá un rol protagónico.

Esta nueva normativa resulta de notable relevancia para el MPF al considerar que uno de sus principios funcionales consiste en dirigir las acciones del organismo “tomando en cuenta los intereses de la víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto”²⁴.

En esta línea, el MPF ha adoptado hace ya varios años una serie de resoluciones mediante las cuales se garantiza el derecho a la información a todas las víctimas de delitos sobre el estado de las actuaciones y de ser escuchadas ante la toma de diversas resoluciones, entre las que se destacan: la Resolución PGN N° 31/94²⁵ sobre el deber de los/as fiscales de informar a las víctimas sobre el estado de las causas; y la Resolución PGN N° 9/09²⁶, mediante la que se recomienda a los/as fiscales que garanticen la participación del/la abogado/a de la querella en todos los casos de ratificación de denuncia; entre otras.

La reciente Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos considera víctima: a) a la persona ofendida directamente por el delito, y b) al cónyuge, conviviente, padre, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieran tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos (conf. art. 2).

En sentido similar, la ley n° 27.482 introdujo modificaciones al Código Procesal Penal acusatorio²⁷ —aún no implementado— en lo que tiene que ver con el rol de las víctimas en las distintas etapas del proceso penal, desde su inicio hasta la ejecución de la pena,

²³ Texto completo disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276819/norma.htm>

²⁴ Art. 9 inc. f de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (ley n° 27.148).

²⁵ Resolución completa disponible en <https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/1994/PGN-0031-1994-001.pdf>

²⁶ Resolución completa disponible en <https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2009/PGN-0009-2009-001.pdf>

²⁷ Texto completo disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239340/texto.htm#13>



ubicándolas como un sujeto procesal que debe ser escuchado ante la toma de decisiones judiciales.

Ahora bien, no podemos dejar de mencionar que entre las reformas incorporadas al Código Procesal, se decidió ceñir la calidad de víctimas al "cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieran vínculo" (cf. art. 78, CPPN). En algunos casos este alcance puede resultar acotado ya que excluiría la posibilidad de actuar como querellantes a algunos familiares no directos de víctimas; máxime cuando en muchos casos de desaparición forzada perpetradas en la última dictadura militar las querellas son impulsadas por primos o sobrinos de las víctimas desaparecidas, por tratarse de procesos judiciales que aún se llevan adelante a más de 40 años de acaecidos los hechos, de modo que en muchos casos quedan pocos familiares en condiciones de asumir la representación legal de las víctimas.

9) Is there any provision and/or practice in the police or other law enforcement officials' bodies for the exclusion of the persons, units or institutions allegedly involved in an enforced disappearance from their participation in the investigation?

La actuación de los/as fiscales federales y nacionales en este tema se encuentra regulada por la Resolución PGN N° 10/11²⁸, que establece una instrucción general dirigida a los/as fiscales con competencia penal para que dispongan o soliciten el apartamiento de una fuerza de seguridad en aquellas investigaciones en las que no pueda descartarse la responsabilidad de alguno de sus miembros en el delito investigado (entre ellos, el de desaparición forzada).

La resolución dictada por el entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi, en el año 2011, obliga a los/as fiscales a instar el apartamiento de una fuerza de seguridad de las tareas investigativas de un ilícito, cuando no pueda descartarse una eventual responsabilidad activa, omisiva, dolosa o culposa de uno o más de sus miembros. En su lugar, el/la magistrado/a deberá designar o solicitar la designación de otra fuerza que reúna las condiciones de imparcialidad e idoneidad requeridas para la tarea. La decisión de disponer o solicitar el apartamiento de la fuerza de seguridad involucrada es obligatoria, y no depende del criterio de cada fiscal en función de las circunstancias del caso concreto.

Es importante destacar que con posterioridad al dictado de esta resolución, el 5 de mayo de 2011, el Congreso de la Nación sancionó la ley n° 26.679 que, entre otras reformas,

Resolución completa disponible en <http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2011/pgn-0010-2011-001.pdf>.

MA. ANGELES RAMOS
FISCAL FEDERAL
PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

incorporó el artículo 194 *bis* al Código Procesal Penal de la Nación, que dispone apartar a “las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha”²⁹. Esta cláusula fue sostenida en el Código Procesal Penal aprobado en 2015 (art. 91), y no se modificó con la ley n° 27.482.

10) Under your country's legislation, can persons who have or alleged to have committed enforced disappearance(s) benefit from special amnesty laws, pardons or similar measures that might have the effect of exempting them from any criminal proceedings or sanction?

En consonancia con los principios y estándares del derecho internacional en materia de crímenes de lesa humanidad, las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por la última dictadura cívico-militar en nuestro país —que incluyeron miles de casos de desapariciones forzadas—, fueron declaradas imprescriptibles e inamnistiables.

En tal sentido, tomando como guía la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y los principios que se derivan del derecho penal internacional, en el año 2005, en el marco de la causa “Simón”³⁰, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (n° 23.492 y 23.521, respectivamente) y consideró que no tendrían efecto alguno los actos fundados en ellas que pudieran oponerse al avance de los procesos o al juzgamiento y eventual condena, o que obstaculizaren de cualquier forma las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio argentino durante la dictadura cívico-militar. El Alto Tribunal sostuvo que no se había configurado una violación al principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal porque a la fecha de los hechos también se encontraba en vigor una obligación internacional de perseguir esos graves delitos. Además, la CSJN repitió el criterio adoptado en un caso anterior³¹, en el que había afirmado la imprescriptibilidad de estos crímenes, reconociendo la existencia de una norma ya vigente en función del derecho internacional público de fuente consuetudinaria³².

²⁹ Ver artículo 3 de la ley n° 26.679.

³⁰ CSJN, *Fallos* 328:2056, “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc.”, causa n° 17.768, sentencia emitida el 14 de junio de 2005.

³¹ CSJN, *Fallos* 327:3312, “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros”, causa n° 259, sentencia emitida el 24 de agosto de 2004.

³² Estos principios fueron ratificados en la ley n° 27.156, sancionada en el año 2015, que establece



Por otra parte, tal como se mencionó en la respuesta a la pregunta 1 de este cuestionario, la ley que tipificó el delito de desaparición forzada de personas establece que ni el juez ni el fiscal que intervengan en una causa en que se investigue este delito podrán disponer su archivo hasta tanto la persona no sea hallada o restituida su identidad (art. 4).

Finalmente, se informa que hasta la fecha no se ha discutido judicialmente el otorgamiento de amnistías a responsables de desapariciones forzadas ocurridas durante períodos democráticos.

11) Please indicate whether your legislation provides for mitigating circumstances for those who are instrumental in bringing the victims forward alive or in providing voluntarily information which would contribute to clarifying cases of enforced disappearance.

La ley n° 27.304³³ —que modifica el art. 41 *ter* del Código Penal, que refiere a la figura del imputado “colaborador” o “arrepentido”—, prohíbe expresamente su aplicación en procesos en los que se investiguen “delitos de lesa humanidad” (art. 3°). Sin embargo, en tanto no todos los casos de desaparición forzada pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la figura podría aplicarse a casos en los que se investigan desapariciones forzadas, por lo que podría ser reducida la escala penal de quien aportara información o datos relevantes relacionados con el delito.

Al respecto, el artículo 41 *ter* incorporado al Código Penal por medio de la ley n° 27.304 establece que: “*Las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles*”. En el caso de los delitos tentados la pena a imponerse es la que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, la cual debe ser disminuida de un tercio a la mitad. Sin embargo, cuando el delito atribuido al imputado

específicamente que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”.

Texto completo <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/267115/norma.htm>

MA. ANGELES RAMOS
FISCAL FEDERAL
PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta los quince años de prisión.

Según este artículo, entre los procesos sobre los cuales se aporten datos o información deberán estar vinculados, entre otros delitos, por los previstos en los artículos 142 bis, 142 ter y 170 del Código Penal.

En tono con la información requerida, para la procedencia de este beneficio será necesario *“que los datos o información aportada contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos; proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos en el presente artículo”*.

12) Please indicate whether there are any instances in which cases of enforced disappearances may be investigated or tried by special or military courts.

No se responde por las razones expuestas en la introducción de este documento.

13) Please indicate if a truth commission or any other similar truth-telling mechanisms have operated in your country and, if so, how this commission has contributed to investigations of enforced disappearances.

a) Acerca del proceso de verdad y justicia en Argentina

Tras la llegada de la democracia en Argentina en 1983, la primera respuesta a los reclamos de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar fue la creación de una comisión de la verdad: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). La CONADEP orientó su investigación a describir el *modus operandi* de la desaparición forzada de personas y a identificar a víctimas y sus responsables. La publicación de su informe *Nunca más*, así como el posterior Juicio a las Juntas militares en la conocida “Causa 13/84”, que culminó con la condena de la mayoría de sus integrantes y dio lugar al inicio de investigaciones penales en todo el país, constituyen una primera etapa del proceso nacional de justicia y verdad.



Una segunda etapa en el impulso que registraron las investigaciones y juicios por aquellas desapariciones forzadas se produjo a partir del 6 de marzo de 2001, cuando un juez federal declaró que las leyes de obediencia debida (ley n° 23.521) y de punto final (ley n° 23.492) — que establecieron una amnistía a los responsables directos y un plazo perentorio para el inicio de las causas, y respectivamente— eran contrarias a la Constitución Nacional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes al momento de su sanción, y que por lo tanto resultaban inválidas, inconstitucionales y nulas. Esta decisión fue confirmada por la Cámara Federal en noviembre de ese mismo año. A partir de estas resoluciones de trascendencia histórica, comenzaron a reabrirse causas que fueron cerradas en 1987 al sancionarse aquellas leyes. En línea con los citados pronunciamientos de la Justicia, el Poder Legislativo en 2003 declaró la nulidad de las leyes n° 23.521 y 23.492. Finalmente en 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó su jurisprudencia anterior, y confirmó la invalidez e inconstitucionalidad de aquellas leyes, lo que terminó de allanar el camino para la reapertura de causas por los delitos de la dictadura que se habían cerrado abruptamente en los 80, a la vez que habilitó la apertura de nuevas investigaciones³⁴.

Desde entonces aún avanza el proceso de justicia por los de crímenes de lesa humanidad, que incluyen miles de casos de desapariciones forzadas. De esta manera, la primera etapa caracterizada por la creación de comisiones y juicios por la verdad se superó a partir de la apertura y avance de los procesos penales.

b) Posturas del Ministerio Público Fiscal sobre el derecho a la verdad en otros casos de desaparición forzada

El MPF ha tenido la oportunidad de pronunciarse en una serie de casos vinculados con el derecho a la verdad en los casos de desaparición forzada. Dichos dictámenes tuvieron en cuenta los estándares internacionales en materia del alcance del derecho a la verdad de los familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos; y en particular su compatibilidad con la aplicación del instituto de la prescripción.

³⁴ CSJN, “Simón, Julio Héctor y Otros s/ privación ilegítima de la libertad” (Causa N° 17.768), decisión del 14 de junio de 2005.



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Así, en un caso de la desaparición de un niño³⁵, el MPF sostuvo que la obligación estatal de asegurar el derecho a la verdad de los familiares de la víctima de violaciones de derechos humanos continúa vigente aun cuando se extinga la pretensión penal. La causa trataba sobre un niño de 5 años embestido por una patrulla del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia de Córdoba. Tras el accidente, los policías que conducían habrían cargado a la víctima —quien aún se encontraba con vida—, en el automóvil, evitando en todo momento que se conociera el incidente. El niño falleció poco tiempo después, y su cuerpo habría sido enterrado por los policías para eludir la investigación en su contra. Sus restos fueron encontrados 17 años después.

Si bien en un principio se consideró que la causa estaba prescripta, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Casal opinó que el tribunal competente debía proseguir con la investigación con fundamento en el derecho a la verdad de los familiares de la víctima. También consideró que al momento de analizar la aplicación del instituto de la prescripción, los/as magistrados/as deben tener en cuenta el deber especial de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Por otra parte, en una causa vinculada con hechos ocurridos en una masacre contra una comunidad indígena en el año 1947 —denominada “Masacre de Rincón Bomba” acontecida en octubre de 1947 en la ciudad de Las Lomitas, provincia de Formosa³⁶—, en la que no se podía avanzar con el proceso penal (dado que los imputados habían fallecido), el MPF sostuvo la importancia de iniciar un juicio por la verdad, de manera tal de asegurar el ejercicio efectivo de este derecho tanto por parte de los familiares de las víctimas como por la sociedad argentina en su conjunto. En este caso, la fiscalía interviniente se basó en un documento técnico confeccionado por la Dirección General de Derechos Humanos, que sistematiza los estándares internacionales en la materia a la vez que analiza los principales antecedentes relevantes para determinar la jurisdicción competente para sustanciar un posible juicio por la verdad a fin de esclarecer los hechos vinculados a la Masacre de Rincón Bomba.

14) Please indicate in which cases your State may establish its jurisdiction over cases of enforced disappearance committed abroad, including whether it does so over the

³⁵ “Funes Gustavo Javier y otro s/ y otro s/ encubrimiento, etc. - incidente de excepción por extinción de la acción penal - recurso extraordinario” – F. 294. L. XLVII. Dictamen disponible en http://www.mpf.gob.ar/dictámenes/2014/ECasal/febrero/F_G_F_294_L_XLVII.pdf

³⁶ Causa “Smachetti, Carlos s/ homicidio agravado con ensañamiento” (Expte. N° 24000946/2011) en trámite ante la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa.



offence of enforced disappearance committed abroad when the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction. If so, please provide examples of situations in which this has occurred.

En el ámbito del MPF funciona desde el año 2016 un *Equipo de Trabajo sobre Jurisdicción Universal*³⁷, creado con el objetivo de elaborar pautas generales para guiar la actuación de los/as fiscales que deban intervenir en casos en los que se pretende aplicar el principio de jurisdicción universal.

Se trata de un espacio de trabajo integrado por representantes de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, y de las Direcciones Generales de Derechos Humanos y de Cooperación Internacional y Regional, quienes a su vez pueden convocar a otros/as integrantes del organismo y a expertos/as en la materia para que participen en los debates que se desarrollen en el ámbito del referido grupo.

Durante los primeros años de funcionamiento, este equipo ha relevado y sistematizado experiencias comparadas, y ha identificado una serie de problemas procesales vinculados con la tramitación de causas por crímenes internacionales perpetrados en otros países. Asimismo, a raíz de diferentes pedidos de colaboración formulados por fiscales de todo el país, el equipo dictaminó en causas concretas, y se pronunció en cada caso sobre la procedencia de habilitar el ejercicio de la jurisdicción universal a la vez que formuló recomendaciones concretas para avanzar con la investigación de los hechos denunciados, que muchas veces incluyen casos de desapariciones forzadas, entre otros crímenes internacionales.

15) Please indicate what measures are in place to ensure that all parties involved in the investigation of enforced disappearances, including the complainant, counsel, witnesses and those conducting the investigation, are protected against ill-treatment, intimidation or reprisal; and to ensure that –if there prohibited acts occur- they are appropriately punished, in accordance with article 13 (3) and (5) of the Declaration. If an office or unit for the protection of these persons exists, please explain its mandate, competency and powers, as well as the applicable legal framework.

³⁷ Creado por la Resolución PGN N° 698/16, disponible en:
<http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2016/PGN-0698-2016-001.pdf>



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Los artículos 79 y 80 del Código Procesal Penal de la Nación establecen los derechos que le asisten a las víctimas y testigos, entre los que se encuentran los denunciantes en un proceso judicial. Es el Poder Judicial de la Nación el que debe velar porque esos derechos sean garantizados.

Al respecto, el artículo 79 prevé que: *“Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos: a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes; b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente designe; c) A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia; d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado; e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación”*.

Por su parte, el artículo 80 del Código Penal agrega que: *“... la víctima del delito tendrá derecho: a) A ser informada por la oficina correspondiente acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de constituirse en actor civil o tener calidad de querellante; b) A ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado; c) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado por persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido”*.

En otro orden de ideas, el 2 de noviembre de 2016 se promulgó la Ley 27.319, sobre técnicas especiales de investigación, que brinda al sistema de justicia herramientas y facultades para la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos. Según esta ley, dichas técnicas son procedentes, entre otros casos, en los de los delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter y 170 del Código Penal.

Entre las figuras que este régimen regula se encuentra la del informante, entendida como toda aquella persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para



la detección de individuos u organizaciones dedicados a la planificación, preparación, comisión, apoyo o financiamiento de los delitos contemplados en dicha ley (artículo 13).

Asimismo ella prevé que la identidad del informante deberá ser mantenida en estricta reserva y que, de ser necesario, deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad física del informante y su familia.

Esta ley también prevé sanciones para quién indebidamente revelare la real o nueva identidad de un agente encubierto, de un agente revelador o de un informante; como así también para quién por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca dicha información.

Respecto a este punto también puede informarse que la ley nº25.764, promulgada el 12 de agosto de 2003, creó el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este programa está destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la Nación, entre otros.

Sin perjuicio de que el delito tipificado en el artículo 142 ter del Código Penal no se encuentra expresamente previsto, la ley permite que, a requerimiento de la autoridad judicial, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos pueda incluir fundadamente otros casos no contemplados, cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o con la violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable.

Las medidas de protección previstas en esta ley pueden consisten en: a) La custodia personal o domiciliaria; b) El alojamiento temporario en lugares reservados; c) El cambio de domicilio; d) El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. En ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis (6) meses; e) La asistencia para la gestión de trámites; f) La asistencia para la reinserción laboral; g) El

MA. ANGELES RAMOS
FISCAL FEDERAL
PROCURADORA DE CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar.

Dichas medidas de protección también pueden ser aplicadas a todas o algunas de las personas que convivan con la persona bajo amenaza.

Las cuestiones atinentes a la admisión y permanencia de los sujetos alcanzados, como así también a la asignación de recursos y adopción de medidas de protección son resortes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

16) What measures has your State adopted in the field of international judicial cooperation to facilitate the effective investigation of transnational cases of enforced disappearances?

El MPF de Argentina ha desarrollado una serie de estrategias a fin de agilizar la cooperación internacional en la investigación de casos complejos que involucran, entre otros hechos, la desaparición forzada de personas.

Concretamente, en el ámbito de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados (REMPM), el MPF promovió la creación de un **Sub Grupo de Delitos de Lesa Humanidad** con el objeto de contar con una instancia regional que permita el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la persecución penal de graves violaciones de derechos humanos, y que facilite la asistencia jurídica internacional en estos casos.

En este marco, se aprobaron instrumentos concretos encaminados a acelerar la cooperación jurídica entre los Ministerios Públicos del Mercosur para el desarrollo de investigaciones penales sobre crímenes de lesa humanidad. Así por ejemplo se negoció y adoptó la Guía para los Ministerios Públicos del Mercosur para la interpretación y aplicación de los tratados de asistencia jurídica mutua en asuntos penales relativos a casos de graves violaciones a los derechos humanos³⁸, y se celebraron una serie de acuerdos bilaterales para la conformación

³⁸ Este instrumento tiene por finalidad complementar los tratados internacionales de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, para casos en los que se investiguen conductas que constituyan graves violaciones a los derechos humanos. De este modo, contempla los alcances y formas de cooperación y asistencia jurídica entre los Ministerios Públicos para casos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos. Guía disponible en: <https://www.mpf.gob.ar/lesa/files/2014/12/Gu%C3%ADa-para-la-aplicaci%C3%B3n-de-tratados-de-cooperaci%C3%B3n.pdf>



de *Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)*, firmados con los Ministerios Públicos de Brasil, Ecuador y Uruguay, respectivamente. El objetivo de trabajo de estos equipos es realizar investigaciones conjuntas entre autoridades competentes de más de un país en el territorio de uno o de varios Estados Parte que suscriban la constitución del ECI. En este sentido, se busca coordinar acciones que permitan alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la persecución de crímenes complejos.

17) Please explain what measures exist in your country for the coordination among the different agencies/units involved in the investigation of enforced disappearances.

Las procuradurías especializadas del MPF trabajan en forma cotidiana en coordinación con las fiscalías federales de todo el país y con otras agencias del Estado.

Así, por ejemplo, la PCCH trabaja en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, en función de los requerimientos de documentación obrante en los Archivos de las Fuerzas Armadas presentados por distintas fiscalías en el marco de la tramitación de las causas judiciales. También interactúa con el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el fin de viabilizar con mayor efectividad las consultas de las fiscalías.

Asimismo, la PCCH trabaja junto a la Comisión de Memoria Histórica³⁹ donde participa en carácter de organismo asesor en la Mesa de Archivos para la implementación del Memorandum de Entendimiento para el Intercambio de Documentación para el Esclarecimiento de Graves Violaciones a los Derechos Humanos (denominado "MOU Regional").

Por otro lado, la Procuraduría colabora junto al Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación⁴⁰, destinado a garantizar la protección integral de las víctimas, testigos, querellantes y funcionarios involucrados en el proceso de juzgamiento

³⁹ La Comisión de Memoria Histórica pertenece a la Dirección de Derechos Humanos y Temas de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

⁴⁰ El Programa Verdad y Justicia es una agencia creada mediante el Decreto N° 606 del 22 de mayo de 2007, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

MA ANGELES RAMOS
FISCAL FEDERAL
PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

por aquellos hechos, y con el Programa Nacional de Protección de Testigos⁴¹, cuyo fin es preservar la seguridad de imputados y testigos que hubieran colaborado con las investigaciones judiciales. Además, la PCCH trabaja junto al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas⁴².

En el ámbito del Poder Judicial, la PCCH trabaja junto a la Unidad de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Comisión de DDHH y Género del Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal de Casación Penal, con el fin de compartir estrategias y evaluar acciones posibles para el avance de las causas.

Por su parte, la PROTEX recibe denuncias de desapariciones y colabora con fiscalías tanto federales como ordinarias de todo el país en causas sobre trata de personas. Para dicha tarea, también trabaja de manera coordinada con distintas agencias estatales abocadas a la búsqueda de personas.

En lo que concierne a las fuerzas de seguridad, el modo de trabajo se encuentra dirigido hacia encomendar puntos de investigación concretos emergentes de la información con la que se cuenta acerca de la desaparición, y aquella obtenida de relevamiento de datos, así como un seguimiento de las medidas llevadas a cabo y la ideación de nuevas estrategias. Se articula con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas que funciona en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación y se trabaja de manera articulada con las Fuerzas Federales, mediante la emisión de alertas, y con la fuerza en particular que tenga intervención en la búsqueda.

Por su parte, en lo que refiere a los distintos Registros Provinciales se le solicita intervención para la difusión de la persona desaparecida en un primer momento, y luego se articula con dichas oficinas y el resto de las dependencias abocadas a la investigación en caso que reciban novedades de parte de la ciudadanía sobre la desaparición. Se solicita la intervención de registros tales como el Registro de Menores Extraviados de la Provincia de Buenos Aires y el Registro de Chicos Perdidos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

⁴¹ El Programa Nacional de Protección de Testigos, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y fue creado mediante la ley n° 25.764.

⁴² El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas pertenece a la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad de la Nación.



Por otro lado, en el año 2013 se formó en la PROTEX, un expediente que tuvo por objetivo implementar una acción conjunta para la investigación y lucha contra la trata de personas denominado "Identificación de personas desaparecidas por el delito de trata de personas y otros fenómenos". El objetivo radicó en unificar y cotejar dos conjuntos de datos para el hallazgo de víctimas de trata de personas u otra modalidad delictiva que se encontraran desaparecidas.

18) What are the obstacles and challenges encountered by your country, if any, to effectively investigate enforced disappearances? Does your State have any recommendations and/or proposals in this regard?

En el marco de las causas judiciales relativas a graves violaciones de derechos humanos, en especial las que involucran personas desaparecidas, el MPF ha identificado una serie de obstáculos para la efectiva investigación de estos casos.

En este sentido, una primera cuestión a considerar es la falta de aplicación del sistema procesal acusatorio y adversarial, y la concomitante limitación que tienen los/as integrantes del MPF para promover la investigación penal de casos de desapariciones forzadas. En efecto, como ya se señaló, en el actual sistema mixto, predominantemente inquisitivo, son los/as jueces/as los titulares de la acción penal, salvo que las causas estén delegadas o tramiten bajo el procedimiento de autor desconocido. De esta manera, se espera que con la implementación del nuevo sistema acusatorio los representantes del MPF tengan más atribuciones para realizar investigaciones conforme los estándares internacionales, toda vez que serán los titulares de la acción penal.

Por otra parte, una dificultad adicional para el desarrollo de investigaciones eficientes está vinculada con la ausencia de una policía científica especializada, que pueda intervenir en casos complejos, como por ejemplo los que involucran la desaparición forzada de personas.

Asimismo, otro desafío para la investigación y enjuiciamiento de las desapariciones forzadas consiste en promover y hacer más fluida la coordinación entre las distintas áreas de competencias dentro del MPF. Ello pues los/as fiscales que tienen la competencia principal para llevar adelante las investigaciones son definidos en razón de la materia y del territorio en donde tuvieron lugar los hechos; y no en función de su especialidad. En tal sentido, cuando una causa ya se encuentre judicializada, las áreas especializadas actúan cuando el/la fiscal principal a cargo solicita su intervención como fiscal coadyuvante o requiere su

MA. ANGELES RAMOS
FISCAL FEDERAL
PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

colaboración técnica. Ello no impide que las procuradurías y unidades especializadas del MPF lleven a cabo investigaciones preliminares por los hechos de sus respectivas competencias.

Por lo demás, en ocasiones los casos de desapariciones forzadas comienzan siendo investigados en la justicia ordinaria, local, muchas veces caratulados como “averiguación de paradero”. De este modo, el MPF y las procuradurías especializadas no pueden intervenir en la causa, sino hasta que quede encuadrada como desaparición forzada y se radique en la justicia federal.

En otro orden, también amerita referir a un obstáculo de carácter fáctico, vinculado con los presuntos imputados en los casos de desapariciones forzadas. En efecto, en la medida en que este ilícito supone, necesariamente, la participación o aquiescencia de funcionarios públicos, es posible advertir problemas para conseguir información dada la dificultad de conseguir testigos y la reticencia a colaborar que en muchas ocasiones tienen los integrantes de las instituciones públicas involucradas.

En cuanto a la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura cívico-militar, existen complejidades específicas vinculadas con el proceso de “justicia tardía”, cuya característica principal es que se produce décadas después de la comisión de los crímenes, debido a que se vio interrumpido por leyes de amnistía y decretos de indulto. Este marco temporal constituye un aspecto crucial para comprender por qué los actores-clave del proceso (imputados, víctimas y testigos) son en su mayoría personas de edad avanzada. Por otro lado, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad ha detectado en sus diagnósticos⁴³ que la baja confirmación de sentencias es uno de los problemas que enfrenta el proceso de justicia por estos delitos.

MA. ANGELES RAMOS
FISCAL FEDERAL
PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

ANDREA POCHAK
DIRECTORA GENERAL
de DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

JUAN M. OLIMA ESPEL
Secretario
Procuración General de la Nación

⁴³ Para más información ver <https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/?tipo-entrada=informes>



Buenos Aires, 22 de febrero de 2019.-

SR.

DIRECTOR NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

DR. RAMIRO BADÍA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Estimado Dr. Badía:

En relación a vuestra solicitud en virtud del requerimiento del **Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias** recibido por el Estado argentino informamos que a la fecha se encuentran vigentes en el Congreso de Nación los siguientes proyectos de ley:

- [Expediente S-191/18](#): Proyecto de Ley que otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contras las desapariciones forzadas, aprobada por Ley N° 26.298. (Odarda, Magdalena).

- [Expediente S-257/18](#): Proyecto de Ley que modifica el primer párrafo del primer artículo de la Ley N° 25.764 -Programa de Protección a Testigos e Imputados-, respecto de incorporar los delitos relacionados con las desapariciones forzadas de personas. (Odarda, Magdalena).
- [Expediente 1027-D-2018](#): Proyecto de Ley que crea el Programa Nacional de Protección de personas en situación de peligro en procesos penales; en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Derogación de la Ley N° 25.764 -Programa de Protección a Testigos e Imputados-. (Donda, Victoria).
- [Expediente 2948-D-2018](#): Creación de la Unidad de registro, sistematización y seguimiento de los casos de los casos de NN, extravío, ausencia, paradero ignorado y desaparición forzada de personas, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (Pietragalla Corti, Horacio).
- [Expediente 1784-D-2018](#): Beneficio a detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar -Ley N° 24.411-, incorporación del artículo 10 querer, sobre cobertura por parte del Estado nacional del gasto de sepelios y sepultura a los restos de familiares que hayan estado en situación de desaparición forzada. (Santillán, Walter).

- [Expediente 2777-D-2018](#): Beneficio indemnizatorio por única vez a los hijos de desaparecidos y/o detenidos por razones políticas que hayan nacido antes del 10 de diciembre de 1983 -Ley N° 25.914-, modificación de los artículos 1° y 2°, incorporando como beneficiarios a las personas concebidas y nacidas con vida durante la privación de la libertad. (Soraire, Mirta).

A la fecha, los proyectos reseñados no han obtenido dictamen.

Esperamos que la información le resulte útil y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o aclaración.

Cordialmente,

Norma Morandini

Directora



Observatorio de Derechos Humanos

H. Senado de la Nación

H. Yrigoyen 1710 – Piso 9, of .909

Ciudad Autónoma de Buenos Aires



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Nota

Número:

Referencia: Remision Nota del grupo de trabajo sobre Desapariciones forzadas. Informe para Consejo DDHH 2019.

A: José Brian Schapira (SSPYEIDH#MJ),

Con Copia A: Moro María Belma (DNAJIMDDHH#MJ), María Luz Moglia (DNAJIMDDHH#MJ),

De mi mayor consideración:

SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ENLACE INTERNACIONAL EN DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en respuesta a la Nota N° NO- 2018- 65221862- APN- SSPYEIDH#MJ enviada por vuestra Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, para solicitar nuestra colaboración en respuesta a una nota remitida por la Dirección de Derechos Humanos y Temas de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (v. NO- 2018- 63959092- APN- DDDHHTG#MRE), que tiene por objeto, solicitar información sobre la cuestión de las políticas públicas y los estándares para una efectiva investigación de las desapariciones forzadas, a fin de contribuir con la elaboración de un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019.

Al respecto, esta Dirección Nacional, lleva a su conocimiento que en respuesta a lo requerido, se enviaron notas, al Sistema de Archivos de la Defensa (v. ME- 2019- 01985867- APN- DNDHYDIH#MD) y a la Dirección de Programas (v. ME- 2019- 01987713- APN- DNDHYDIH#MD), ambas dependientes de esta Dirección Nacional.

En respuesta a dichas notas, podemos informar:

1. Sistema de Archivos de la Defensa, informó que "...el punto 12) del cuestionario no se corresponde con las competencias ni los trabajos que llevan a cabo el Equipo Técnico del Sistema de Archivos de la Defensa ni los Equipos de Relevamiento y Análisis de Documentos de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, con respecto al punto 7) se informa que las autoridades que investigan pueden solicitar a los Equipos asistencia para el acceso a documentos de las Fuerzas Armadas. Asimismo, los archivos a los que se accede son solo los archivos administrativos generales e históricos de las FFAA y no incluyen archivos de inteligencia. Los recursos para llevar a cabo dichas tareas de asistencias tienen limitaciones técnicas y de recursos..."

2. La Dirección de Programas, informó que: "...en el punto 17 del Cuestionario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, cumpla en poner en su conocimiento, para elevar a quien corresponda, que el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección de Programas – a mi cargo - de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, articula con los Juzgados que investigan casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la última dictadura militar, tramitando los pedidos de éstos hacia las distintas fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), facilitando el acceso a la documentación que se halla bajo custodia de las mismas, supervisando y ejerciendo control en cuanto a la velocidad de respuesta y completitud de la misma. Es de señalar que se hallan en trámite dos pedidos de Habeas Corpus, en los cuales se mantiene un proceso permanente de búsqueda de información, respondiendo periódicamente a los juzgados requirentes si se han encontrado nuevos datos sobre el caso. Según lo determinado por la Justicia esta información es mensual o trimestral. En el mismo sentido de colaboración, personal de ésta Dirección se halla en contacto permanente con los Juzgados, Fiscalías y Defensorías a fin de facilitar la tarea de éstos en la búsqueda de la verdad, asesorar en como formular los requerimientos para que sea más fácil obtener respuesta adecuada y mantener al tanto a las autoridades judiciales, en cuanto al estado de tramitación de las requisitorias..."

Sin otro particular saluda atte.

CENTRO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, “DR. FERNANDO ULLOA” (en adelante Centro Ulloa)

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL DE LA NACIÓN

El Centro Ulloa se crea por Decreto Presidencial 141/2011, y tiene entre sus funciones:

- Asistir integralmente y acompañar a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos a través de la planificación de estrategias y políticas públicas que impliquen dispositivos de acompañamiento y/o abordajes terapéuticos a nivel nacional.
- Brindar **acompañamiento en los juicios por delitos de Lesa Humanidad a las víctimas y querellantes que son citadas a dar testimonio**. Para ello se coordinan acciones con el Ministerio Público Fiscal, con los Tribunales Orales Federales, con los Juzgados de Instrucción, con Organismos de Derechos Humanos, con el Programa Verdad y Justicia y con el Área Jurídica Nacional de esta Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. El trabajo se realiza a nivel nacional, articulando también con los equipos de acompañamiento provinciales, previamente capacitados por el Centro Ulloa.
- Implementar estrategias para construir y consolidar una Red Nacional de Profesionales de la Salud Mental que permita efectuar derivaciones a los ámbitos públicos, generando vínculos de confianza con los profesionales para establecer una modalidad de trabajo conjunto y de seguimiento de los casos tratados.
- Crear espacios de debate interdisciplinario contribuyendo a la formación, análisis y difusión de la temática.

La planificación de las políticas reparatorias desde una perspectiva que se extienda más allá de lo pecuniario y abarque las consecuencias que provocan los delitos de lesa humanidad y las violaciones de Derechos Humanos en la subjetividad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, forma parte de las políticas públicas actuales del Estado Nacional, e implican un compromiso indeclinable con las políticas de

reparación en democracia.

Respecto del **acompañamiento a víctimas-testigos en los juicios por delitos de Lesa Humanidad que comprende la desaparición forzada de personas**, el Centro Ulloa tiene a su cargo el *Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a los Querellantes y Testigos Víctimas del terrorismo de Estado*.

Las marcas producidas por el terror de Estado, y la situación de muchas de las víctimas que tienen que comparecer como testigos en los juicios por delitos de Lesa Humanidad, ameritan una acción de presencia y acompañamiento por parte del Estado en ese complejo proceso, con el objetivo de evitar que la búsqueda de justicia sea revictimizante, y procurando generar las condiciones que posibiliten enmarcar el acto subjetivo que implica el testimonio como parte del proceso reparatorio.

El dispositivo construido implica el acompañamiento antes, durante y después del acto del testimonio.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Nota

Número:

Referencia: Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas - Informe Consejo de DDHH 2019

A: Maria Gabriela Quinteros (DDDHHTG#MRE),

Con Copia A: Anabel Beatriz Alfonsin Cano (DDDHHTG#MRE),

De mi mayor consideración:

**A LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y TEMAS DE GÉNERO
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
MINISTRA MARÍA GABRIELA QUINTEROS
S. / D.**

Tengo el agrado de dirigirme a UD. en adición a la nota NO-2019-12570265-APN-DNAJIMDDHH#MJ a fin de remitir adjunta la información remitida por la Dirección Nacional del Programa Verdad y Justicia a efectos de ser puesta en conocimiento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.

Sin otro particular saluda atte.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Nota

Número:

Referencia: Remisión Nota Grupo Trabajo Desapariciones Forzadas. Informe para Consejo DDHH 2019

A: Maria Gabriela Quinteros (DDDHHTG#MRE),

Con Copia A: Anabel Beatriz Alfonsin Cano (DDDHHTG#MRE),

De mi mayor consideración:

A LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y TEMAS DE GÉNERO

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MINISTRA MARÍA GABRIELA QUINTEROS

S. _____ / _____ D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con la nota del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) remitida por Nota NO-2018-63959092-APN-DDDHHTG#MRE. Al respecto, se solicitó información sobre la cuestión de las políticas públicas y los estándares para una efectiva investigación de las desapariciones forzadas, a fin de contribuir con la elaboración de un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019.

En tal sentido, se remitió a diferentes organismos dentro de esta Secretaría de Derechos Humanos, al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Defensa de la Nación, al Ministerio Público Fiscal; y al Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación el “Cuestionario para Estados del GTDFI sobre normas y políticas públicas sobre la investigación efectiva de desapariciones forzadas”.

En primer lugar, se adjunta el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal con las respuestas al punto 1), a los puntos 3) a 11), y 13) a 18) del Cuestionario.

En tanto, la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, a través del Sistema de Archivos de la Defensa y de la Dirección de Programas brindó sus correspondientes aportes respecto de lo solicitado por GTDFI en los puntos 7) y 17). Se anexa esa comunicación.

Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación informó, en documento que se acompaña, que a la fecha se encuentran vigentes en el Congreso de la Nación proyectos de ley que responden a lo solicitado por el GTDFI en los puntos 1), 3), 8) y 15).

Por último, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, “Dr. Fernando Ulloa” de esta Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación se refirió a los puntos 5) y 8) del Cuestionario, en documento que se embebe al presente.

Sin otro particular saluda atte.